



LA IZQUIERDA QUE ESTUVO, ESTÁ Y ESTARÁ

**DOCUMENTO POLÍTICO Y ORGANIZATIVO DE LA XIII
ASAMBLEA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA**



ÍNDICE

VOLVER A EMPEZAR DESDE LOS PRINCIPIOS	3
1. EL MUNDO, EL SISTEMA Y LA SOCIEDAD EN CRISIS	4
1.1. <i>La crisis del capitalismo</i>	4
<i>El capitalismo, incapaz de resolver los problemas de la humanidad</i>	4
<i>El capitalismo es irreformable: no nos podemos conformar con ponerle parches a un sistema criminal</i>	7
<i>Los problemas de la juventud</i>	8
<i>Trabajo y con derechos, una prioridad</i>	10
<i>Sabemos lo que hay que hacer: erosionar y superar el capitalismo</i>	11
1.2. <i>La crisis del sistema internacional</i>	14
<i>Darle la vuelta a una Europa reaccionaria</i>	14
<i>Nuestro lugar en un mundo en crisis</i>	17
1.3. <i>La crisis ecológica-planetaria</i>	20
1.4. <i>La crisis de la organización social</i>	23
1.5. <i>La crisis de los cuidados</i>	25
2. NUESTRO PAÍS EN CRISIS	27
<i>La evolución de la crisis de régimen</i>	27
<i>España feminista</i>	29
<i>España diversa</i>	30
2.1. <i>El marco político-estratégico del Gobierno de coalición</i>	34
3. REFORZAR IZQUIERDA UNIDA ES REFORZAR LA IZQUIERDA SÓLIDA FIABLE Y CERCANA; REFORZAR IU ES REFORZAR LA IZQUIERDA RUPTURISTA Y DE CLASE	36
3.1. <i>EVOLUCIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA Y DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA</i>	36
3.2. <i>PROPUESTA POLÍTICO-ORGANIZATIVA</i>	39
3.2.1. <i>Organización y arraigo</i>	39
3.2.2. <i>Referencia histórica</i>	41
3.2.3 <i>Vocación unitaria: propuesta y posicionamiento para los espacios de convergencia</i>	42
<i>Para ello, proponemos las siguientes líneas.</i>	43
3.3 <i>Acciones, campañas y debates a desarrollar en este período:</i>	45
3.3.1. <i>Debate sobre nuestra propuesta de Frente Amplio</i>	45
3.3.2. <i>Campaña por la derogación de la Ley Mordaza</i>	45

VOLVER A EMPEZAR DESDE LOS PRINCIPIOS

Estamos inmersos en un proceso de crisis que sigue sacudiendo las sociedades y acelerando los tiempos políticos. Con esta premisa partía el documento de la Asamblea Federal anterior, y sigue tan vigente que es difícil hacer un recorrido –por ligero que sea– por los acontecimientos más importantes que hemos afrontado durante los últimos tres años. Una vez superada la pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania puede ser el más destacable a nivel internacional junto con el criminal genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, con el apoyo de EE. UU. y la colaboración necesaria de la UE sin consecuencias para Israel, y la definitiva voladura de las normas del derecho internacional. En cualquier caso, la crisis es una sucesión de eventos imprevisibles, algunos improbables, otros aparentemente imposibles, que aceleran los ritmos y atraviesan de incertidumbre la política y la propia sociedad.

En nuestro país, la crisis de régimen no se ha cerrado completamente, pero ha devenido en una crisis de Estado (cuyas expresiones más visibles son, por ejemplo, la crisis territorial del Estado o la ofensiva de algunos de sus aparatos como el judicial o el mediático) porque las contradicciones principales chocan con un enquistamiento institucional. El espacio de la izquierda transformadora arrastra el desgaste de la fatiga, la merma de expectativas y la división. A pesar del Gobierno de coalición, salvado in extremis, son las fuerzas conservadoras quienes llevan la iniciativa política-cultural, lideradas por sus facciones más radicales. Nos situamos en un interregno todavía abierto porque el ciclo político de la década rápida pasada no acaba de terminar completamente, ya que el nudo actual de contradicciones no facilita una resolución con una dirección clara. Ningún proyecto de país tiene la suficiente capacidad como para imponerse de manera definitiva a medio y largo plazo, ni el democrático-plurinacional de las izquierdas ni el nacional reaccionario de las derechas.

Hemos vivido una situación excepcional en los últimos años. Por primera vez en la historia "social" reciente de nuestro país se ha demostrado que las recetas neoliberales no son las únicas. El escenario es complejo porque al mismo tiempo el PSOE no ha cambiado su carácter y buena parte de lo conseguido ha venido de nuestra capacidad de incidir desde las instituciones y la movilización.

Sin embargo, contamos con algunas ventajas respecto a hace cuatro años: aunque continúe la crisis y la incertidumbre, podemos extraer lecciones valiosas del ciclo político que estamos dejando atrás. Este deja un balance institucional positivo, pues la izquierda transformadora alcanzó sus cotas más altas de apoyo popular y de incidencia gubernamental. España es una anomalía internacional positiva, entre otras cuestiones por la relevancia de nuestro espacio político. Aunque hemos sabido aprovechar la oportunidad que se abrió con la agudización de las contradicciones, todavía no hemos sido capaces de frenar el retroceso de apoyos que se viene produciendo durante los últimos años. Un sobrevuelo rápido por Europa basta para corroborar esta anomalía. Asistimos a un avance reaccionario y a un retroceso de las fuerzas progresistas y populares en todo el mundo.

Sin embargo, el balance en términos organizativos, culturales y sociales es distinto. Si una máxima definió la dinámica de la década anterior fue la de "muévete rápido y rompe cosas". Esta rapidez impugnatoria permitió librar algunas batallas en las condiciones impuestas por el dominio de la coyuntura, pero tuvo algunos de los efectivos negativos a medio y largo plazo de los que hoy tenemos que hacernos cargo. Aunque la política seguirá atravesada por la crisis y la incertidumbre, nos toca dejar atrás esa dinámica y apostar por la reconstrucción de unas bases sólidas y estables que nos permitan a la izquierda generar confianza. Mirada larga y paso firme.

La crisis de nuestra organización se adelantó a la propia crisis de régimen. En 2008 apostamos por un proceso de refundación, no solo de Izquierda Unida, sino del conjunto de la izquierda. En 2012 intentamos salir de la X Asamblea Federal con la fuerza suficiente como para erigirnos en la alternativa aglutinadora del descontento y los anhelos democratizadores mayoritarios en la sociedad. Sin embargo, tan solo dos años más tarde fracasamos en este propósito y nuestro proyecto político-estratégico sufrió una profunda derrota que nos llevó a la propuesta de superar la Izquierda Unida realmente existente en la XI Asamblea de 2016. En la Asamblea anterior apostamos, tras un relativo proceso de estabilización, por reforzar nuestra organización para fortalecer los espacios de convergencia.

Este es el recorrido de las propuestas estratégicas de nuestra organización durante los últimos 16 años. Es útil reseñarlo porque evidencia una particularidad positiva del actual contexto histórico: por primera vez tenemos las suficientes certezas y la suficiente estabilidad para continuar con la propuesta de la Asamblea anterior actualizándola a las condiciones del momento político actual. Reforzar Izquierda Unida sigue siendo el objetivo estratégico. Seguimos apostando por el fortalecimiento de los espacios de convergencia, pero somos plenamente conscientes de que la utilidad de estos será directamente proporcional a la fuerza de Izquierda Unida.

Esta es la principal certidumbre que ofrecemos al conjunto de la militancia. Trabajaremos por reforzar Izquierda Unida, esto es, por reforzar su implantación territorial, su inserción social y su solidez organizativa. En la dimensión externa, trabajaremos por mejorar su posicionamiento en el ámbito público y en el imaginario colectivo de la ciudadanía progresista en general y de la clase trabajadora y los sectores populares en particular. Con autonomía política, conscientes de que la autonomía no se mide en función de la distancia respecto a los demás, sino en función de nuestra capacidad para mantener una hoja de ruta propia trabajando con más organizaciones y más gente. Autonomía sin aislamiento, refuerzo sin corporativismo.

La década rápida nos deja lecciones positivas y negativas. Integramos las positivas y corregimos las negativas. Ahora, con más estabilidad, partimos de la máxima leninista: volver a empezar desde los principios. Los principios de una organización sólida y fiable, con arraigo territorial y social, con una referencialidad histórica reconocible, con una convicción transformadora y una vocación unitaria. Una organización, en definitiva, útil, seria y responsable. Una organización para generar confianza y empujar en la construcción de la sociedad socialista. Una organización para reforzar la izquierda que estuvo, está y estará.

1. EL MUNDO, EL SISTEMA Y LA SOCIEDAD EN CRISIS

1.1. La crisis del capitalismo

El capitalismo, incapaz de resolver los problemas de la humanidad

El capitalismo, en aras de una supuesta eficiencia, y a base de explotar a la clase trabajadora y de aprovechar los cambios tecnológicos, ha desarrollado la capacidad de producir demasiado rápido y demasiado barato. Pero eso supone un obstáculo insalvable para que las innovaciones tengan el tiempo suficiente para ser rentabilizadas. Los ciclos de negocio no pueden sostenerse en el tiempo y eso dificulta que el capitalismo halle nichos de rentabilidad suficientes y estimula su acumulación en los mercados financieros que producen una burbuja detrás de otra. Cuando

estallan, la onda expansiva se lleva por delante parte de lo acumulado en la fase previa, pero también derechos, conquistas sociales y vidas humanas.

El problema en las crisis para el capitalismo no es que se incremente de forma desorbitada el desempleo o se deteriore la renta de las personas trabajadoras. El reto para el sistema es encontrar la forma de rentabilizar la inmensa masa de capital acumulado. No se trata de un problema de escasez, sino de una sobreabundancia de capital acumulado que no genera valor ni utilidad alguna para sus poseedores. No debe extrañarnos que el propio sistema capitalista necesite cada cierto tiempo, precisamente por su éxito de acumular más y en menos manos, que las crisis destruyan parte del resultado del expolio previo. Y eso ocurre cada vez en períodos de tiempo más cortos.

A esa tendencia estructural del capitalismo (caída de la tasa de ganancia y sobreproducción), se le une otra contradicción que dificulta garantizar el proceso de acumulación futuro. Es la combinación imposible del mismo con vidas dignas, saludables y deseables que permitan la reproducción social. Hacen falta muchas personas que vendan su fuerza de trabajo a unas pocas para que estas últimas acumulen. Y, además, fruto de la división sexual del trabajo y la alianza entre el sistema capitalista y el patriarcal, el trabajo reproductivo sobre las que se sostiene tanto el sistema como la vida en sí misma, recaen sobre las mujeres.

El capitalismo se ha desarrollado en base a la explotación de la clase trabajadora. Todos los avances técnicos que haya logrado en este tiempo se han volcado en el incremento y perfeccionamiento de esta relación social. El expolio, consumo y despilfarro de recursos que asola el planeta, es el modo en que se reproduce la explotación capitalista. No obstante, la acumulación del capital no se puede sostener indefinidamente sin baches o caídas abruptas. Cuando se culminan los ciclos y estallan las burbujas de capital ficticia, infladas sobre todo en el ámbito financiero, se revela la cara más oscura del capital. Es entonces, cuando se agota la onda expansiva, que se pone la diana en todo aquello que suponga un obstáculo a la rentabilidad: las conquistas sociales en forma de derechos y, más generalmente, buena parte de la vida humana.

Transitar hacia un modelo que ponga la vida en el centro del sistema requiere que la satisfacción de necesidades sea universalizable y que no se sustente en un sistema de dominación atravesado por desigualdades de género, clase, etnia, orientación sexual, identidad de género o capacitistas.

Además, la satisfacción de necesidades debe realizarse dentro de los límites físicos del planeta, cuestionando el modo de producción, empleo y consumo que ha permitido el proceso de acumulación del sistema capitalista y que nos lleva a crisis recurrentes como anteriormente se ha indicado.

Esa destrucción *creativa* no tiene solución y por eso el sistema capitalista no es capaz de resolver de forma satisfactoria los problemas que se le plantean hoy a la humanidad. No porque carezcamos de recursos o medios para que las personas vivan con dignidad, sino porque su función no es esa. El objetivo solo es y solo puede ser lograr la tasa mayor de rentabilidad en el menor plazo posible a quienes han acumulado en la fase previa provocando explotación y desequilibrios sociales y económicos no sólo entre clases, también entre países y territorios. Descartemos esperar un resultado diferente de un sistema que no puede tener entre sus objetivos retos de otro tipo.

En este contexto, las guerras han vuelto a tomar protagonismo como salidas útiles e instrumentos del capitalismo. Control de los mercados y de las materias primas y poder político, por supuesto, pero también suponen un estímulo de la inversión y el gasto público en armamento, destrucción

de fuerzas productivas “que sobran” y reconstrucción de lo previamente destruido, generando valor para los capitales ociosos. El intento de abordar los problemas de madurez del capitalismo con estos métodos siega miles de vidas humanas y genera inmenso dolor entre la gente, especialmente entre los sectores más vulnerables.

No debe extrañarnos que las crisis económicas sean cada vez más cercanas en el tiempo. De hecho, es un síntoma de “buen funcionamiento” del sistema en cuanto a su capacidad de acumular rentabilidades, y no nos debe sorprender que esos impulsos tengan una duración cada vez más limitada en el tiempo.

La globalización desplegada en las últimas décadas del siglo XX y que, a partir de los 90, ha subrayado la hegemonía de EEUU y sus aliados en las relaciones internacionales, ha entrado en retroceso evidente tras la crisis de 2008. Retroceso en sus números globales y en su equilibrio.

El comercio internacional y las cadenas globales de valor están reformulándose. El peso de China y otros países, fundamentalmente de la zona Asia-Pacífico, la fragilidad de economías de las “democracias industriales”, están modificando esa realidad hasta el punto de que asistimos a lo que algunas instituciones califican de “desglobalización” y otros de “nueva gobernanza de la globalización”. En cualquier caso, el factor determinante es el retroceso de la hegemonía estadounidense y de sus socios, entre los que se encuentra la UE. Todo lo que sucede en la escena internacional y, muy principalmente, los conflictos de seguridad están vinculados a este movimiento tectónico en la globalización y el surgimiento de una nueva realidad mundial alejada de los modos e intereses imperialistas occidentales.

Según los datos del Banco Mundial, en 2024 el crecimiento mundial se desacelerará por tercer año consecutivo pasando del 2,6% registrado el año pasado al 2,4%. Según las proyecciones, las economías en desarrollo crecerán solo un 3,9%, más de un punto porcentual por debajo del promedio registrado en la década anterior. En concreto, los países de ingreso bajo crecerán un 5,5%, menos de lo esperado. A finales de 2024, la población de aproximadamente uno de cada cuatro países en desarrollo y alrededor del 40% de los países de ingreso bajo seguirán siendo más pobres de lo que eran antes de la pandemia del coronavirus. En las economías avanzadas, por su parte, la previsión es que en 2024 el crecimiento se desacelerará y pasará del 1,5% registrado en 2023 al 1,2%. El resultado es que, a final de 2024, la economía mundial batirá un récord. Serán los cinco años con el menor crecimiento del Producto Interior Bruto de las últimas tres décadas.

En ese páramo, no deberíamos mirar con suficiencia que la economía española se haya comportado en los últimos años mejor que las del resto de la Unión Europea. De hecho, en 2023 tuvo un mejor comportamiento de lo previsto con un crecimiento del 2,5%, eso sí, debido al fuerte tirón de la actividad durante el primer semestre, ya que desde entonces el PIB avanza a tasas moderadas. Y en 2024 y en los años sucesivos tendremos que afrontar los resultados de una política monetaria más restrictiva que ha disparado los tipos de interés, la finalización del impacto que han supuesto los fondos europeos y el restablecimiento de las reglas fiscales tras la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que supone echar el freno de mano a las políticas públicas expansivas. En todo caso, España seguirá creciendo por encima de la media europea. Pero en modo alguno debemos considerar que el crecimiento económico a través del PIB, es la medida del éxito del país, porque éste sólo mide, la parte de la economía mercantilizada sin tener en cuenta el bienestar, los costes ecológicos o la redistribución de la riqueza.

El capitalismo es irreformable: no nos podemos conformar con ponerle parches a un sistema criminal

El ciclo neoliberal que incorporó una parte de las demandas sociales de la izquierda en los años 60 del pasado siglo no volverá. En concreto, la crisis del capitalismo español no es sino la manifestación de la falta de espacios de rentabilidad económica para el capital, y el propósito del proyecto neoliberal es recomponer esos espacios mediante un proceso de empobrecimiento y mayor explotación laboral. Y siempre es la clase trabajadora la primera que paga sus consecuencias. Quienes están en situación más precaria son y serán quienes sufrirán en mayor medida las recesiones. Y por eso, mujeres, trabajadoras y trabajadores migrantes, personas mayores con pocos ingresos, personas del colectivo LGTBIQA+, personas con discapacidad, o jóvenes precarios en general, y sobre todo aquellos con menos formación, no van a encontrar respuesta en el sistema a sus demandas. Y detrás de ellas y ellos, el resto. Ante esto, la propuesta de Izquierda Unida y de los espacios de convergencia donde trabajemos debe ser la de una izquierda transformadora y con discurso y praxis anticapitalista.

En los últimos 15 años de crisis, pintar de verde el capitalismo ha sido la gran apuesta para salir del pozo. Básicamente era la promesa de una solución capitalista a una crisis capitalista con gigantescas inversiones en energías renovables, electrificación de la economía, descarbonización y algunas inversiones sociales para aderezar el conjunto. Con estas inversiones se impulsaría el empleo y a su vez los ingresos fiscales para sostener un Estado con más vocación social. Ese nuevo pacto incluiría respetar el papel de las grandes corporaciones en esa necesaria transición ecológica que, a cambio de inversiones públicas, facilitarían la rentabilidad del capital privado a cambio de que rebose una parte de esa ganancia hacia la mayoría social precarizada. En eso consiste el Green New Deal y hemos de decir de forma clara que no resuelve el problema de un capitalismo maduro. Ni siquiera esa transición verde sería suficiente como solución capitalista a la crisis capitalista.

Una prueba de ello es que las pulsiones para exprimir a la clase trabajadora para buscar nuevos ciclos de acumulación continúan. Se concretan a nivel institucional en la nueva vuelta a la mal llamada austeridad a nivel de la Unión Europea con reglas fiscales que, aunque podrían ser cualitativamente mejores que las existentes hasta ahora e introduzcan algo de racionalidad de sus argumentos y mayor flexibilidad en su aplicación, seguirán manteniendo límites del 3% de déficit y del 60% de deuda sobre el PIB, presentes en el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), desfasados, arbitrarios y que no tienen ningún fundamento económico. En definitiva, no se aleja con el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento una fase depresiva del ciclo económico. Por supuesto que la forma diferente de abordar la crisis en estos últimos cinco años ha sido positiva para la clase trabajadora porque en el Estado español se ha tejido una red de protección, un escudo social para la ciudadanía más afectada que ha permitido preservar el tejido económico y el empleo.

Las medidas de mantenimiento de salarios han llegado a proteger a 7,2 millones de trabajadoras y trabajadores, casi un 31% de la población activa durante la pandemia. Es evidente que la presencia en el gobierno de Unidas Podemos antes y de Sumar en la actualidad, y especialmente el papel que ha jugado Izquierda Unida en las instituciones, ha supuesto una respuesta radicalmente opuesta a la que se hubiera implementado sin nuestra presencia. De hecho, la intervención pública auspiciada redistribuye rentas en España para favorecer a la mayoría social. En concreto, los impuestos y las prestaciones sociales redujeron la desigualdad un 35% en 2021

y el 60% de hogares con menor renta fueron de hecho beneficiarios netos de esa intervención, percibiendo un subsidio efectivo.

Además, en este periodo el Gobierno de coalición ha subido el salario mínimo más de un 54%, lo que supone un alivio para los salarios más bajos. Los sectores en los que más han subido los salarios son justo los que tienen mayor porcentaje de sus trabajadores en el decil más bajo de renta. En términos salariales, a partir de la información de los deciles salariales de la EPA, el mayor incremento salarial acumulado en el periodo 2018-2022 se concentra en los que menos salario perciben. Esta evolución está ligada al ritmo de crecimiento que ha experimentado el SMI en el mismo periodo, y destaca que la mejora salarial se concentra en la parte baja de la distribución de salarios, a diferencia del periodo anterior, 2008-2018, donde el mayor incremento salarial lo experimentaron los deciles medios y altos. Y los asalariados que más aumentan sus salarios son las mujeres (13,7%), quienes trabajan a tiempo parcial (19,6%), la juventud (20,5%), quienes tienen un contrato temporal (21,2%), quienes tienen estudios primarios (21,7%) y las personas de nacionalidad extranjera (22,1%). La mejora salarial se ha hecho compatible con la creación de empleo porque cabe destacar que España ha sido el país donde más empleo asalariado se ha creado entre los años 2018 y 2022 en los países de la UE, en cifras absolutas, por encima de países como Alemania, Francia o los Países Bajos.

A pesar del evidente dique de contención construido a las medidas más reaccionarias que se hubiesen impuesto con un gobierno de la derecha y la extrema derecha, e incluso con uno del PSOE (en solitario o con otros apoyos), y a pesar de las medidas adoptadas en beneficio de los sectores populares gracias a la presencia en el gobierno de la izquierda transformadora, entre esos mismos espacios sociales beneficiados se ha impuesto una percepción y un estado de opinión generalizado que transmite el relato impuesto por la ultraderecha, desconociendo, olvidando, modificando u ocultando las evidentes lecturas positivas que, a pesar de las carencias, ha ofrecido la acción de gobierno. La derecha conservadora y reaccionaria, en su estrategia de desestabilización del gobierno de coalición, también pretende aprovechar e instrumentalizar las diferentes movilizaciones que se producen en el ámbito de la sanidad, educación, políticas agrarias o servicios a las personas. Hay que denunciar la manipulación de la información y la instrumentalización de las movilizaciones con el objetivo que tiene la derecha de contaminar y confundir a la sociedad en general. En este sentido, debemos evidenciar de forma pedagógica que estas movilizaciones responden a los años de los recortes y las privatizaciones de las crisis pasadas. Desde la acción de gobierno se debe dar respuesta con avances sociales a todas estas movilizaciones a la vez que se denuncia la voluntad instrumentalizadora por parte de las derechas.

En cualquier caso, teniendo en cuenta el efecto positivo de las medidas hasta ahora adoptadas, es evidente que son insuficientes para hacer frente a las necesidades y a los retos que necesitamos responder. Es necesario, pues, generar y transmitir un discurso y un relato de y desde la izquierda para “nuestra gente”, con iniciativa, a la ofensiva y sin complejos.

Los problemas de la juventud

Para abordar los problemas del país es imprescindible atender a la situación específica de su juventud. Los datos de paro para la juventud obrera de entre 16 y 24 años en España son del 28.6%, mientras que en Europa la media es de 14,9%, siendo la española la más alta seguida de Suecia y Portugal. La tasa de temporalidad alcanza el 44,8% entre los 16 y 24 años y el 34,7% entre los 16 y los 29. Esto evidencia la inestabilidad vital que sufre la juventud en nuestro país,

que se materializa tanto en la falta de independencia, como en la imposibilidad del desarrollo de proyectos vitales estables.

Estamos ante un problema colectivo como sociedad y que tiene como desencadenante las condiciones materiales de la clase trabajadora como la precariedad, la temporalidad, o la dificultad de la emancipación juvenil.

Ejemplo de esto es el hecho de que las personas jóvenes en España deberían destinar el 93,9% de su salario neto anual para alquilar en solitario. Este dato se complementa, además, con el hecho de que la edad media de emancipación está alrededor de los 30 años. Es decir, las personas jóvenes en España no alcanzan las condiciones materiales necesarias para emanciparse hasta los 30 años de media.

Izquierda Unida entiende imprescindible garantizar el acceso a la vivienda a la juventud, al conjunto de la sociedad y a los grupos vulnerables en particular mediante el aumento del parque público de vivienda en régimen de alquiler a precio asequible. Este hecho es condición necesaria para el desarrollo vital pleno de los individuos.

Izquierda Unida entiende que, justo por su papel central en la vida de las personas, la vivienda no puede ser un bien de mercado del que extraer ganancias porque así no se podrá garantizar el acceso a la vivienda en condiciones dignas.

Estos datos no son meramente descriptivos, sino que también tienen implicaciones sobre la calidad de vida: el 59,3% de las personas jóvenes afirman haber tenido problemas de salud mental en el último año (2023) y el 27,1% de estos vinculan estos problemas de salud mental a carencias materiales severas. Es importante tener esto en cuenta cuando se hable de hacer frente a los problemas de salud mental: se necesitan servicios públicos de calidad, sí; pero también condiciones materiales compatibles con un desarrollo vital estable y seguro.

La experiencia vital de la juventud en España está marcada por una sensación de infantilización definida por una falta de capacidad de desarrollar una autonomía vital propia en la que se evidencie el paso de los años y el crecimiento en el sentido más estricto de la palabra: la realidad de la etapa de los 25 a los 29 años es similar a la de la etapa de los 20 a los 25, lo que implica una sensación de atasco vital. A pesar de los avances que se van consiguiendo la juventud siente no progresar en ninguno de los aspectos que conforman las experiencias vitales que determinan el paso de la infancia a la madurez, siendo eternamente jóvenes precarios sin posibilidad de proyectarse en un futuro próximo, ni a medio o largo plazo.

En el marco de la teorización sobre la desafección política en general y de la juventud en particular, así como de la vinculación analítica de esta desafección al auge de la extrema derecha y del populismo, es pertinente atender a la materialización de esta desafección en nuestro contexto: el grupo poblacional que más se abstuvo en las últimas Elecciones Generales fueron las personas jóvenes de entre 18 y 24 años. Esto puede tener que ver con diversos factores: eficacia auto percibida, asunción de la condición de ciudadanía, percepción de capacidad de agencia en lo público y utilidad de las instituciones. También la participación política, se ve afectada por las condiciones laborales (trabajos a turno partido, elevada precariedad).

Pero, en definitiva, más allá del plano teórico, se manifiesta una preocupante distancia entre la juventud y las estructuras clásicas de la política institucional (instituciones públicas, partidos, sindicatos, etc.), dejando atrás a un importante vector de cambio para la clase obrera. En ningún caso debemos asumir nuestra conformidad a que, desde la juventud organizada, se pueda pensar que nuestra participación en gobiernos pueda limitar nuestra respuesta ante sus necesidades.

Igualmente, de la mano del desinterés de la juventud hacia lo público viene el existente envejecimiento que encontramos en nuestros espacios de militancia y participación, sin que exista una renovación o incorporación de nueva militancia por varias causas relacionadas con lo anteriormente expuesto: precariedad, desarraigo, falta de oportunidades y expectativas... que se materializa en un problema que es tanto público, como interno en nuestra organización. El hecho de no ser capaces de incorporar a los espacios de organización social y política a la juventud hace que se potencie una cultura cada vez más individualista y reaccionaria entre los y las jóvenes de este país que actúa como otro elemento más de desmovilización política. La alternativa a la desmovilización pasa por atraer a nuestras organizaciones de lucha a la juventud como sujetos de cambio de nuestro país.

Así, es una necesidad tanto democrática como orgánica el impulso por parte de nuestra organización de espacios para la elaboración de respuestas políticas pensadas desde una incidencia política rupturista y desde la intervención pública radical con el objetivo de actuar para la mejora de las condiciones de vida de la juventud trabajadora, así como en pro de una conciencia colectiva y de clase que se materialice como vector de cambio en nuestras sociedades.

En definitiva, nuestra organización ha de convertirse en un referente de clase para la juventud obrera que sirva como herramienta de canalización de demandas y participación política fomentando así la conformación de espacios de debate, reflexión y participación activa relativos a los conflictos cotidianos. Debe aspirar a vehicular todas las luchas que involucran a las personas jóvenes y a tejerlas entre sí de cara a la conformación de un bloque amplio y diverso, capaz de abocarnos al socialismo, único escenario viable para un futuro de paz, bienestar y sostenibilidad. Para ello, desde nuestra organización facilitaremos que nuestras personas jóvenes accedan a responsabilidades orgánicas que permitan la renovación y la implicación directa en el trabajo orgánico.

Trabajo y con derechos, una prioridad

Según cálculos del Banco Central Europeo, el peso de los salarios en la renta nacional ha caído en torno a 10 puntos porcentuales en las últimas décadas en la Eurozona. Esta es una evolución común en la mayoría de las economías europeas. En los países OCDE, entre 1990 y 2018, la erosión en la cobertura de la negociación colectiva ha conllevado una distribución de la renta más escorada hacia las rentas del capital, en detrimento de los salarios. Coincide con la evolución en España y también con los análisis del propio Banco de España, que constataba que en 2022 los beneficios empresariales crecieron siete veces más que los salarios. Si los beneficios de las empresas no financieras fueron elevados, los de la banca destacaron aún más. Es evidente que, con el marco existente, la capacidad de las empresas –sobre todo las más grandes– de extraer plusvalía se ha perfeccionado.

A pesar de la importante creación de empleo y el impacto positivo de la reforma laboral, tendremos una tasa de paro del 11,2% a finales de 2024, un nivel todavía muy elevado en comparación europea. Aunque los salarios más bajos han subido cuatro veces más que los altos en los últimos cinco años, la fiscalidad sigue siendo una debilidad para avanzar hacia una menor desigualdad. El 1% más rico paga menos impuestos sobre su renta que el 20% más pobre. Ese 20% más pobre de la población soportó un tipo efectivo medio del 28,2%, cifra que fue subiendo poco a poco hasta el máximo del 39,9% que se registró para el grupo de centiles que oscilan entre el 91 y el 99. Aquí termina la progresividad, porque al llegar al centil número 100 –que son los

189.000 hogares más ricos del país– el tipo efectivo cayó al 23,9%, el más bajo de todos. En definitiva, el sistema fiscal sigue adoleciendo de insuficiencia de ingresos, falta de equidad y la elusión y fraude que se concentra en los que perciben elevadas rentas y poseen cuantioso patrimonio.

Incluso con un cambio de políticas más favorables a la mayoría social, la desigualdad y la precariedad siguen siendo lacerantes, por lo que dicho cambio de políticas sigue siendo insuficiente para evitar las próximas crisis que, sin duda, vendrán.

Por ello debemos coordinarnos de forma estable con las organizaciones sindicales de clase y eso debe ser un elemento clave en el trabajo de nuestras asambleas de base.

Además, no debemos perder de vista los retos que traen las nuevas realidades del trabajo, como podría ser el formato de teletrabajo. Esta modalidad si bien aporta ventajas en términos de conciliación personal y familiar y reduce tiempos de desplazamiento, nos lleva a unos entornos laborales en los que en ocasiones la clase trabajadora no tiene un centro/lugar de trabajo de referencia y donde se pierden los espacios informales, en los que normalmente se crean vínculos personales que pueden llevar a sindicalización y la organización colectiva. La presencialidad y la creación de estos momentos, eventos y rutinas son esenciales para la solidaridad entre compañeras de trabajo y no debemos renunciar a esto en favor de algunas ventajas individuales. Debemos luchar por una mejoría de las condiciones laborales y una reducción de las horas de trabajo que no conlleve necesariamente esta destrucción de espacios, y que apueste por formas híbridas y voluntarias.

En esa línea, debemos recuperar la indemnización por despido improcedente que estaba fijada en 45 días por año trabajado, equiparar las pensiones al salario mínimo interprofesional y recuperar la jubilación a los 60 años para facilitar la incorporación laboral de nuestras personas jóvenes.

Sabemos lo que hay que hacer: erosionar y superar el capitalismo

El capitalismo no es reformable porque sus problemas los provocan las propias leyes que lo rigen. Unas leyes que lo llevan inexorablemente a una trayectoria cada vez más contradictoria, que provoca una destrucción económica y regresión social incompatibles con la preservación de las conquistas democráticas. Es decir, provoca una sistematización cada vez mayor de procesos de destrucción de fuerzas productivas. Por eso, además de entender la noción de crisis asociada a los momentos de interrupción del proceso de acumulación, que se expresan en la caída o estancamiento del PIB, necesitamos caracterizar el significado de la ausencia de periodos intermedios realmente expansivos.

Si el planeta tiene recursos limitados, no se puede crecer de forma ilimitada. Y para esto no tiene respuesta el capitalismo.

Nosotras y nosotros sí.

El desafío que tenemos es asegurar una vida materialmente segura, digna y sentida como vida buena a la vez que compatible con la realidad de un planeta desbordado y en proceso de cambio. Porque es evidente que, si las personas se ven obligadas a elegir entre supervivencia económica en el corto plazo y supervivencia ecológica y económica a largo plazo, se dará prioridad a la primera opción y se hará imposible alcanzar la segunda.

Para asegurar esas vidas dignas y hacerlas compatibles con las limitaciones de nuestro ecosistema, tenemos que hablar de decrecimiento, no como una alternativa, sino como una realidad que hay que afrontar. Porque es un hecho que hay recursos para que todo el mundo pueda vivir en buenas condiciones y dentro de los límites que nos impone el planeta. Usando entre un 10 y un 40% de la energía que hoy se emplea, todo el mundo podría vivir con dignidad, pero eso exige poner fin a la desigualdad y realizar un trasvase de riqueza de las clases dominantes a las clases trabajadoras y de los países desarrollados a los subdesarrollados. Es evidente que la gestión de la escasez por parte del mercado solo generará más desigualdad e insostenibilidad. La situación que estamos viviendo va a forzar a la inmensa mayoría de la clase trabajadora y de los sectores populares a buscar una alternativa. Y en la izquierda tenemos el reto de poner sobre la mesa propuestas que sean realistas, no un utópico capitalismo de rostro humano que es incompatible con la propia naturaleza del sistema.

Asistimos a un cambio en los patrones de consumo en nuestro país.

El proceso de digitalización ha contribuido e impulsado la mayor concentración y acumulación de capital por parte de grandes gigantes y monopolios internacionales a través de la venta online. Así, empresas como Amazon, Aliexpress o Shein ofrecen una amplia gama de productos a bajo coste y transporte a domicilio, lo que lo hace especialmente atractivo.

Estos monopolios digitales se caracterizan por:

Una sobreproducción que implica un consumo de recursos naturales que supera con creces las necesidades reales de la población, y que implica un gran impacto en el medio ambiente. Por poner un ejemplo, un estudio publicado por la ONU en 2020 indicaba que la industria textil, especialmente la llamada “fast fashion”, es la principal responsable del desperdicio de agua a nivel mundial. La producción de una camiseta requiere 2700 litros de agua, suficiente para abastecer a una persona durante dos años y medios. La industria textil es responsable, además, de un 20% de la contaminación de aguas potables y un 10% de las emisiones mundiales de carbono.

Un aumento en el consumo a través de internet de productos de baja calidad, de rápido consumo y que son desechados tras pocos usos. El bajo coste y el fácil acceso operan generando una falsa sensación de “oportunidad”, facilitando el consumo cualquier día, a cualquier hora, y desde cualquier lugar.

Ese aumento en el consumo digital va en detrimento del pequeño y mediano comercio, que no puede hacer frente a ese bajo coste, la amplia oferta, a los horarios, ni a la posibilidad de ofrecer una venta digital en igualdad de condiciones, a pesar de garantizar un producto de mayor calidad y cuya huella ecológica es mucho menor. También genera condiciones laborales de explotación ya que estos grandes monopolios ubican su producción en países cuya mano de obra les permite acumular plusvalía y abaratar costes, en condiciones completamente inhumanas.

El Covid 19 ha contribuido a afianzar los patrones de consumo digitales, disparando durante el confinamiento la venta por internet en detrimento del pequeño y mediano comercio, sin que se haya revertido esta situación.

Según un estudio realizado por el ministerio de consumo, en España se desperdiciaron 1.363 millones de kilos de alimentos a lo largo de 2020, de los que 1.038 millones fueron productos sin utilizar. Según Cáritas, los vertederos españoles reciben cada año casi un millón de toneladas de ropa. La obsolescencia programada hace que en la Unión Europea se generen 2500 millones de toneladas al año de basura tecnológica.

El patrón de consumo actual es completamente insostenible. No es posible mantenerlo en un planeta de recursos finitos. Ante la relevancia que esta problemática toma en la agenda política, los grandes monopolios apuestan por adjetivar la producción con el término “sostenible”. “Consumo sostenible”, “desarrollo sostenible” ... Esta estrategia, lejos de reducir el consumo, lo favorece: se producen coches híbridos, pero se producen más coches, se generaliza el uso de bombillas de bajo consumo, pero aumenta el gasto eléctrico. La sostenibilidad implica crecimiento, y el crecimiento es incompatible con la actual situación del planeta. Frente a este término, vacío de contenido, hay que apostar por el decrecimiento, entendiendo este como un ajuste entre las necesidades reales de consumo de la población y la producción. Eso conlleva reducir el consumo, ajustando el mismo a las necesidades reales. También supone relocalizar, apostando por un comercio local que garantice unos mínimos de calidad, así como derechos laborales y reutilizar, apostando por modelos de economía circular y redistribuir, eliminando la desigualdad existente entre personas y países con menos recursos económicos y aquellas que consumen por dos.

En definitiva, consumir menos, consumir mejor, consumir todas.

La transformación que propugnamos exige un Estado con un poder público fuerte, democrático y participativo, que intervenga para garantizar los derechos y proteger particularmente los derechos de la mayoría social trabajadora para establecer servicios públicos de calidad y universales, que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al ocio; para redistribuir la riqueza y las oportunidades. Todos ellos deben quedar blindados en la Constitución de forma que pueda exigirse su ejercicio efectivo.

El modelo productivo y reproductivo de nuestro país debe reorientarse de modo que disminuya su huella ecológica, sea resiliente ante la crisis climática y la emergencia ecosocial y cubra las necesidades sociales. Deberá estar orientado hacia la priorización de la producción orientada a la satisfacción de suelo social de necesidades, la relocalización y cercanía de la actividad económica que produzca los bienes necesarios para hacerlo, el redimensionamiento de los sectores altamente vulnerables por su alta dependencia de la energía fósil y de bienes escasos, altamente contaminantes o emisores y la protección a los trabajadores y trabajadoras en riesgo.

Las políticas keynesianas no dan respuestas a los retos civilizatorios a los que nos enfrentamos y al poder de los grandes grupos económicos. Se hace más necesario que cuestionemos el papel del Estado en relación con la propiedad de los medios de producción y, especialmente, en aquellos sectores que resultan estratégicos para nuestro país y en los que no existen empresas públicas que velen por los intereses colectivos.

En este marco, el marxismo sigue siendo válido para analizar la realidad económica, social y política y conformar una alternativa integral. Nuestra tarea es erosionar el capitalismo y al mismo tiempo ir construyendo el bosquejo de la sociedad socialista a la que aspiramos. Este propósito debe arraigar en la lucha por las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, debe construir una vocación superadora del capitalismo, incompatible con la propia naturaleza del sistema, para avanzar hacia un socialismo consciente de los límites biofísicos del planeta.

En definitiva, apostamos por otra forma de producir y distribuir los recursos con la que se garantice a todo el mundo una vida buena y digna, con alimentación, vivienda, sanidad, educación, transporte y movilidad dentro de los límites del planeta.

1.2. La crisis del sistema internacional

La XIII Asamblea Federal de Izquierda Unida se desarrolla en un marco global caracterizado por diferentes crisis superpuestas. La crisis económica que acabamos de repasar está estrechamente ligada, como veremos, con la crisis ecosocial, pero también con la crisis de un sistema internacional que está en jaque por la violencia imperialista en diferentes lugares del mundo. Y de manera, más cercana, con la crisis del proceso de integración regional europeo como consecuencia del avance de posiciones reaccionarias que cuestionan los derechos humanos y la propia democracia liberal-representativa.

Darle la vuelta a una Europa reaccionaria

La guerra en Ucrania ha convertido nuestro continente en un tablero para el enfrentamiento geopolítico entre potencias que se disputan la hegemonía. La expansión hacia el este de la OTAN, una estrategia de EEUU en las últimas décadas ha generado una escalada armamentística en nuestro continente y un aumento de tropas que nos ha devuelto a un escenario de Guerra Fría al que nunca habríamos querido volver. La invasión del territorio ucraniano por el Gobierno autoritario y expansionista ruso (tras un conflicto en Ucrania que comenzó en 2014 y en el que la extrema derecha ha tenido un papel importante en la desestabilización del país y el Estado ucraniano ha atacado a su propia población en el Donbass) es una vulneración del derecho internacional que ha puesto de relieve que las normas que regían la estabilidad en el continente europeo tras la disolución del Pacto de Varsovia. Esta guerra está siendo instrumentalizada por quienes gobiernan la Unión Europea para imponer un modelo de seguridad belicista y alineado con los intereses de la industria armamentística, lo opuesto del concepto de seguridad humana definido por las Naciones Unidas y que nuestra organización defiende.

El marco de la guerra también está siendo utilizado en la Unión Europea para imponer un discurso conservador construido desde el miedo. Un discurso que plantea una falsa escasez –que no es otra cosa que la concentración de toda la riqueza en las manos de unos pocos– para poner en marcha las políticas reaccionarias que requieren generar este clima de inseguridad como el cierre de fronteras o la transferencia de recursos de los servicios públicos al área de seguridad. En este marco, la izquierda europea tiene enormes dificultades para desarrollar una narrativa que le permita hacer políticas diferentes. El señalamiento e incluso criminalización de quienes proponen salidas diferentes a la guerra en Ucrania a seguir alimentando la espiral bélica ha dificultado enormemente el trabajo de la izquierda, que ya era prácticamente residual en la mayor parte de los países del antiguo bloque del este.

Nuestra pertenencia al Gobierno de coalición ha generado una situación compleja, al quedar en manos del PSOE determinadas políticas que atan nuestra capacidad de intervenir y determinar la posición de España en asuntos internacionales. Hemos de ser conscientes de esta limitación para poder articular una estrategia en paralelo a nuestra pertenencia al Gobierno.

Las diferentes pulsiones e identidades existentes dentro de la izquierda europea no han conseguido ser bien articuladas en un sujeto único, también por las diferencias entre diferentes partidos a escala nacional en los diferentes países. A esta división histórica se ha sumado nuevos partidos que, pese a presentarse ante la sociedad como supuestas alternativas de izquierdas, actúan dentro del marco del miedo que se ha convertido en hegemónico, aceptando sus discursos

en cuestiones como la migración o los derechos de las personas LGTBIQA+. Esto va unido a la ola de gobiernos en los que participa la extrema derecha dentro de la UE, que están intentando y en algunos casos consiguiendo generar cambios de calores y por ello retrocesos en marcos de derechos ya asumidos. Algunos ejemplos de estos son las leyes que recortan derechos de las personas LGTBIQA+, las políticas antifeministas, la negación de la memoria democrática o los discursos xenófobos.

En ese sentido, nuestra apuesta pasa por seguir reforzando los espacios más unitarios como son el Partido de la Izquierda Europea y el Grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo desde nuestras posiciones políticas de confrontación con el marco de las derechas y el social-liberalismo, y por ser los únicos espacios de rechazo a la actual Unión Europea del capital frente a la necesaria Europa de los derechos y de las personas. Es necesario convertir estos espacios en actores más unidos y cohesionados en torno al programa político para convertirlos en verdaderamente útiles y con mayor capacidad de intervención en los conflictos que –como vemos con la reciente oleada de movilizaciones del sector agrícola– tienen cada vez una mayor dimensión europea.

La pulsión militar de esta Unión Europea se construye desde la alianza intrínseca con la OTAN por lo que debe ser un objetivo principal la salida de la organización de todos los estados europeos, así como la generalización de una cultura para la paz apartada de las escaladas violentas neocoloniales. Por esto la idea de que la creación de un ejército europeo puede contribuir a mayores niveles de soberanía está en las antípodas de la realidad. En este momento la Unión Europea demuestra su verdadera naturaleza a través de medidas como el apoyo al gasto armamentístico para que no compute entre los objetivos de déficit mientras sí lo hace la inversión en derechos como la salud. Este cambio de ciclo después de un periodo de mayor expansión del gasto público tras la pandemia del coronavirus pone de relieve que se trata de un proceso de integración concebido para la imposición de políticas neoliberales, cuyas instituciones tienen un déficit democrático evidente y que se construye desde un marco que favorece las lógicas competitivas internas que implican rebajas en derechos sociales y laborales. Nosotros y nosotras sí defendemos un proceso de integración regional europeo, pero uno que se construya desde una lógica de solidaridad y cooperación conjunta contra los grandes retos de este tiempo. Se equivocan quienes creen que se puede dar solución a toda la problemática vinculada a la crisis ecosocial y sus derivadas exclusivamente desde dentro de las fronteras del Estado-nación.

IU debe influir en el gobierno para hacer valer nuestra histórica relación con Latinoamérica, especialmente con Cuba, y con el mundo árabe, con el objetivo de desarrollar una política internacional autónoma, de Estado, independiente de los dictados de EEUU y que establezca vínculos preferentes de colaboración y cooperación con estos países, sirviendo de motor para modificar las posiciones subalternas de la UE respecto a los dictados imperialistas estadounidenses.

Las políticas neoliberales y racistas que implementan los partidos de la derecha tradicional junto a la socialdemocracia en la Unión Europea y el papel creciente de la extrema derecha son vasos comunicantes. Por ello, es imprescindible la apuesta por profundizar la acción conjunta con nuestras organizaciones aliadas en todo el continente para trabajar un marco europeo al servicio de las mayorías. La Unión Europea es una entidad que sigue en proceso de configurarse políticamente y nuestra oposición al modelo no puede llevarnos a inhibirnos de los debates que se están produciendo. Además de la militarización, la política migratoria o el impacto negativo

que tiene la política europea sobre nuestro sector agrícola, otro de los grandes ejes de los próximos años serán las políticas de ampliación.

En relación con la política migratoria nos resulta especialmente preocupante la aprobación del nuevo Pacto de Migración y Asilo. Una vez más, bajo el pretexto de frenar a la extrema derecha, las principales fuerzas del Parlamento Europeo hacen suyos sus postulados abogando por medidas xenófobas, racistas, y contrarias a los derechos humanos más elementales, las cuales han convertido nuestras fronteras en un cementerio. En estas circunstancias nos encontramos ante una legislación que ahonda en el control de fronteras, en facilitar la devolución de personas migrantes y solicitantes de asilo (con medidas adicionales tan preocupantes como el control biométrico) y en general en la criminalización de la migración. Frente a esto desde Izquierda Unida abogamos por leyes migratorias dirigidas a potenciar un Sistema Común Europeo de Asilo basado en la solidaridad, el establecimiento de vías migratorias legales y seguras, la garantía del procedimiento de protección internacional a todas las personas que lo requieran, y en general una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de personas migrantes y refugiadas. Además, criticamos los acuerdos establecidos con terceros países como Marruecos, Túnez o Libia destinados a externalizar el control de fronteras a través de estados de corte autoritario a los que se les riega con millones de euros destinados a la persecución de la población migrante, ocasionando un sinfín de escenarios de violencia, torturas y muerte en las rutas migratorias. Frente a esto apostamos por mecanismos efectivos de cooperación con los países de origen, establecimiento de vías legales y seguras para la migración y, especialmente, el respeto a la soberanía de los países, la no injerencia y el freno del expolio de sus recursos naturales, razón última de los flujos migratorios.

La Unión Europea se constituye así de forma abierta en un actor geopolítico en el continente cuyo principal objetivo es construir hegemonía frente a la posición de Rusia, atendiendo a unos intereses que no son los de las mayorías sociales y los pueblos de Europa. En el marco de las negociaciones de paz, se deben buscar marcos de cooperación con Rusia para caminar hacia la independencia de Europa de los intereses estadounidenses para constituirse como un agente dentro de un orden mundial multipolar basado en el derecho internacional y la sostenibilidad del planeta. De este modo se plantea de forma constante la adhesión de países como Ucrania o Moldavia, cuya entrada en la Unión Europea tendría un impacto inmenso a nivel de distribución interna de los recursos, además de los problemas derivados de los estándares democráticos o la prevalencia de la corrupción en estos países. Entendemos que, pese a que cualquier país puede pretender de forma democrática adscribirse al bloque que considere, la Unión Europea no puede consolidarse como un factor de desestabilización en los confines orientales del continente y además debe trabajar para preservar unos mínimos comunes en cuanto a democracia y derechos humanos a nivel interno que ya se ven seriamente amenazados por los gobiernos de la extrema derecha.

Debemos sacar conclusiones de la política de ampliación europea de los últimos años. Esta ampliación, y la ruptura de los marcos políticos de cooperación y seguridad en nuestro continente demuestran que no nos encontramos sólo ante una adhesión a un espacio de cooperación económica y política sino ante una orientación atlantista que no responde más que a los intereses de las oligarquías económicas y políticas europeas y los intereses estratégicos de Estados Unidos. Por ello, para la izquierda debe ser un eje central recuperar la idea de una seguridad global.

La política de sanciones aplicada por la Unión Europea a Rusia también se ha demostrado fracasada, No sólo no ha servido para empeorar la economía rusa, sino que su efecto boomerang inició una escalada de precios y un incremento de la inflación en los países de la UE que dura hasta hoy. La dependencia de los países de nuestro entorno del gas ruso nos ha colocado en una paradoja absurda: financiamos las armas ucranianas mientras seguimos engordando las cuentas de las gaseras rusas. Esta situación es especialmente sangrante en el caso de España, que tras la nefasta política en relación con el Sáhara Occidental y la ruptura de acuerdos con Argelia se ha alzado como el segundo mayor comprador de gas natural ruso. Sólo en 2023 la entrada de este producto creció un 30%.

Tampoco podemos obviar el papel expansionista de Rusia y sus vulneraciones del derecho internacional, que son un ataque a la soberanía popular, incluida a través de la injerencia militar con ejércitos privados en países del Sahel.

Por todo esto, España debe utilizar el poder que le otorga su peso específico dentro de la Unión y nuestro gobierno para bloquear las políticas más lesivas dentro del Consejo. Nuestra configuración de gobierno es una excepción en un mapa muy conservador que nos otorga la responsabilidad de demostrar que hay otras vías posibles al neoliberalismo, la xenofobia y el belicismo. Por ello, es imprescindible la articulación de nuestra crítica estructural a la Unión Europea con nuestro internacionalismo que nos lleva a tejer alianzas con fuerzas de todo el continente para conseguir una mayor democratización de las instituciones europeas cuya credibilidad, después de sus posicionamientos en los actuales conflictos, ha quedado muy devaluada internacionalmente. A su vez, en España nuestra posición crítica y alternativa a la UE debe ser uno de los ejes en los que debemos hacer hincapié de forma constante en los espacios de unidad con otras fuerzas y en el Gobierno de Coalición, con las contradicciones que esto pueda suponer.

Nuestra posición respecto al desarme es clara, y ante las apuestas por incrementar el gasto militar debemos multiplicar nuestro trabajo político en defensa de la paz. No podemos dejar pasar este punto, ya que el armamento sólo sirve para matar, nunca para la paz, y frente a la propuesta de mayor poder armamentístico para ganar las guerras está la nuestra de desarme total para ganar la paz.

Nuestro lugar en un mundo en crisis

Vivimos en un mundo en el que la multipolaridad ya es una realidad que avanza, pero en el que el principal polo imperialista, los Estados Unidos, además de Rusia y otras potencias, continúan actuando como si fuera una fuerza hegemónica que puede imponer su voluntad globalmente mediante la vía militar. Existe por su parte una voluntad clara de vaciar de contenido las instituciones del sistema internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial, sustituyéndolos por un sistema construido mediante bloques militares que reivindica el uso de la guerra como herramienta de política internacional. Nuestra apuesta decidida por la paz es precisamente una muestra de nuestro compromiso con un sistema internacional plenamente democrático, y por tanto, antifascista, y construido desde los derechos humanos y el derecho internacional frente a quienes pretenden imponer la ley del más fuerte. Es importante en el plano internacional también reivindicar y poner en primer plano la memoria antifascista para evitar que el sentido común antifascista se diluya o se pierda.

Apostamos por la disolución de todos los bloques militares, comenzando por la OTAN, priorizando nuestra salida, y la política de desarme como camino hacia ese modelo diferente de relaciones internacionales que reconoce el carácter holístico e interdependiente de la seguridad. Dicho de otra forma, alimentar guerras en países terceros tiene un impacto directo sobre todo el planeta, al igual que lo tiene que exista pobreza o falta de acceso a recursos básicos en cualquier lugar del mundo. Nadie está a salvo si no existen unas garantías de seguridad humana para todos y todas. Mientras no se disuelva la OTAN, IU no dará apoyo a la estrategia de expansión de esta alianza militar. La alternativa, también en políticas de defensa, debe ser la garantía de la autonomía europeo respecto a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Así mismo, IU rechaza el rearme militar que están llevando a cabo las instituciones europeas.

El auge de la extrema derecha en la Unión Europea no es un fenómeno aislado, y el auge de diferentes líderes reaccionarios en todo el mundo pone de relieve su buena coordinación internacional. Ese auge de posiciones se impulsa sobre la lectura reaccionaria de la crisis de globalización y la insatisfacción ante la respuesta política a la misma de los partidos y fuerzas hegemónicas hasta hace poco. Un auge al que, en ocasiones, ha contribuido la izquierda política. Cada vez más, tendemos a un escenario donde los sistemas democráticos se juegan su futuro frente a los reaccionarios. Este es el caso particularmente en América Latina, donde las fuerzas progresistas han tenido que generar alianzas en todo el espectro de las organizaciones democráticas para frenar el avance de la extrema derecha. La situación varía mucho de unos países a otros, pero en este continente hemos visto cómo los países del eje Atlántico norte no han dudado en apoyar a la extrema derecha frente a líderes democráticos cuando esto ha favorecido sus intereses geopolíticos y comerciales, al tiempo que se continúan imponiendo sanciones unilaterales que condenamos como injerencias inaceptables, cuyo máximo exponente es el bloqueo a Cuba.

Sin embargo, si hay una región que hoy pueda disputar la hegemonía global del neoliberalismo esa es América Latina, que también ha puesto sobre la mesa modelos de integración regional radicalmente diferentes al europeo, contruidos desde la colaboración y la soberanía popular. Pese a las dificultades que presenta la presencia de gobiernos como el de Argentina, en estos momentos son fundamentales iniciativas que profundicen en la construcción del bloque latinoamericano como pretenden dirigentes progresistas como Gustavo Petro en Colombia o Lula da Silva en Brasil. Además de su propia posición interna de lucha contra las desigualdades en sus países, su contribución a un escenario global plenamente democrático y sin división en bloques es fundamental. La inseguridad y el reto del combate contra el narcotráfico suponen un inmenso reto para la izquierda latinoamericana, ya que victorias como la de Bukele en El Salvador nos muestran el riesgo de que las clases populares acaben apoyando medidas represivas y antisociales.

Pese a que es una garantía frente a las relaciones internacionales contruidas desde la violencia, el sistema internacional tiene importantes déficits y ha sido incapaz de solucionar muchos de los conflictos más crueles y dolorosos de nuestro tiempo. En Palestina vemos cómo el sistema de apartheid, genocidio, limpieza étnica y colonización israelí no para de avanzar desde la fundación del Estado de Israel en 1948. La colonización de tierras, el desposeimiento y expulsión forzosa de un alto porcentaje de la población, y la negación de los derechos de la población palestina en el conjunto de su territorio han sido una constante durante décadas que ahora se ve enormemente recrudescida con un ataque genocida sin precedentes sobre la Franja de Gaza.

Esta política genocida responde a la ideología sionista, una ideología surgida en Europa que defiende la necesidad de construcción de un Estado de carácter judío en el territorio palestino y que se ha validado de la ocupación constante durante décadas. Esta política se ha acelerado en los últimos meses, siendo el objetivo de Israel acabar con la presencia palestina y la invasión del conjunto de su territorio. Para ello se vale de sus apoyos internacionales, principalmente de los Estados Unidos que hace posible la impunidad ante la violación de derechos humanos contra la población palestina y la ocupación de su territorio. La ONU y su Consejo de Seguridad no serán formalmente democráticos mientras algunos estados mantengan el derecho a veto. También es importante señalar la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir las resoluciones y sentencias de la Corte Penal Internacional por sus estados parte, y que ésta ha ordenado la adopción de medidas inmediatas y efectivas para proteger a la población palestina del riesgo de genocidio.

En este contexto no sólo defendemos el derecho del pueblo palestino a la resistencia y a la defensa, sino que también reclamamos a nuestro gobierno el reconocimiento urgente del Estado Palestino así como la imposición de medidas efectivas para acabar con la impunidad de Israel, como la ruptura de todas las relaciones diplomáticas y comerciales con el ocupante, incluida la venta y la compra del armamento. Exigimos que acabe la ocupación ilegal del territorio palestino y que los culpables del genocidio sean juzgados y las víctimas reparadas, que aumente el presupuesto destinado a la UNRWA y que España participe activamente en todos los organismos internacionales para exigir el fin del genocidio, la llegada de ayuda humanitaria a la población y la retirada de las fuerzas sionistas de todo el territorio palestino. Estos años también hemos visto un recrudecimiento de la ocupación del Sáhara Occidental, donde se sigue librando una guerra silenciada y donde el giro del PSOE en la posición histórica de España ha tenido un impacto terrible. Aquí Marruecos ha podido ignorar las resoluciones e incluso el mandato de la misión de la ONU creada ad hoc para la resolución del conflicto sin haber sufrido ninguna consecuencia. Nuestro compromiso con la autodeterminación del pueblo saharauí y su derecho a tener un estado propio está fuera de duda y constituye un eje importante de disputa, también dentro del Gobierno de coalición. Otro conflicto del que las potencias occidentales son cómplices es el que ocurre en la República Democrática del Congo, donde la población es masacrada para garantizar la extracción de recursos naturales para la producción de tecnología.

También se suceden conflictos armados en otros lugares del mundo, como Yemen o Mali en los que los países europeos y Estados Unidos intervienen de forma directa o a través de terceros para salvaguardar sus propios intereses. Esta realidad pone de relieve que, décadas después de que este terminara de forma nominal, el colonialismo sigue vivo como sistema de imposición y regulación de relaciones internacionales. La defensa de intereses geopolíticos mediante la guerra, el expolio de recursos naturales y la diferencia en cuanto a derechos en función del origen que siguen existiendo son sus consecuencias más duras. En Izquierda Unida apostamos por un verdadero respeto a la soberanía popular que ponga fin a este modelo y por articular mecanismos para impedirlo. Es imprescindible una democratización del sistema de Naciones Unidas que empodere a la Asamblea General como máximo órgano y articule mecanismos que no permitan que las resoluciones se ignoren de forma sistemática.

Uno de los principales problemas que existen hoy en el marco del sistema de Naciones Unidas es el derecho a veto que tienen el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Esto hace que el sistema se construya desde una asimetría entre países que refleja una correlación de fuerzas que hoy no es real. La crisis que atraviesa el sistema internacional es una oportunidad para su reformulación, articulando nuevas alianzas entre países que comparten retos de tanto calado como los que pone sobre la mesa la crisis ecosocial.

El actual modelo agotado tiene su reflejo económico en relaciones de dominación a través del acaparamiento de tierras y recursos o la imposición de herramientas que, como el Franco CFA, permiten controlar las economías de países africanos desde Europa. Pero también lo tiene en un modelo de relaciones comerciales insostenible, con cadenas de distribución demasiado largas y sin respeto alguno a los derechos de los productores en los países de origen o en los de consumo. Por ello, nuestra propuesta de democratización de las relaciones internacionales es también incompatible con el modelo neoliberal de mercados globales dominado por un puñado de multinacionales y plantea también un cambio en las relaciones económicas y comerciales que les haga verdaderamente sostenibles a nivel social y medioambiental. Es importante poner en valor las alianzas y relaciones de carácter regional como alternativa a los proyectos imperialistas. Estas experiencias pueden ayudar a países cercanos que comparten realidades a colaborar y superar problemas socioeconómicos que pueden serles comunes frente a intereses externos de los países imperialistas, puntas de lanza de las multinacionales.

En estos momentos, dado el escenario político internacional, la política exterior es uno de los asuntos que cobran mayor relevancia y, a su vez, uno de los aspectos que está produciendo mayores contradicciones en el Gobierno de coalición y en los espacios de unidad. El apoyo al envío de armas a Ucrania, el mantenimiento de las relaciones diplomáticas con Israel, el no reconocimiento del Sáhara Occidental en contra del derecho internacional, o el uso de puerto de Maó por buques de la OTAN son posiciones inaceptables que chocan directamente con nuestros postulados, algunos de ellos fundacionales, y que requieren redoblar nuestros posicionamientos públicos y acciones tanto institucionales como externas que visibilicen nuestra posición.

1.3. La crisis ecológica-planetaria

La Tierra encadena 12 meses por encima de los 1,5 °C de calentamiento global. Las corrientes oceánicas, que desempeñan un efecto fundamental sobre el clima, están debilitándose y reduciendo de manera preocupante su velocidad. En concreto, la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico se encuentra en un punto de inflexión crítico según la comunidad científica. Y siete de los nueve umbrales que permiten la vida humana sobre la Tierra ya han sido sobrepasados.

En Izquierda Unida entendemos que es clave articular un discurso y plantear una alternativa política alrededor de una agenda de propuestas, sinergias y acciones con la mirada puesta en vivir mejor dentro de los límites biofísicos del planeta, con justicia social y democracia.

Es decir, construir una propuesta ecosocial transformadora que, desde un documento de mínimos plantee una alternativa real y factible desde parámetros de decrecimiento y que sirva de elemento de partida para impulsar un tejido social y político que vaya más allá de lo institucional: un bloque histórico construido desde abajo, del que todas podamos sentirnos parte, para lo que también requerimos avanzar en el ámbito teórico y así conciliar las diferentes corrientes (como el decrecimiento, el ecosocialismo, etc.) y como herramienta que ayude a superar las contradicciones que la transformación que planteamos lleva aparejadas.

Si históricamente se ha vinculado el bienestar con el crecimiento económico, debemos dejar atrás indicadores capitalistas como el PIB o la renta per cápita y otorgar la centralidad a la evaluación social de la actividad económica derivada de los empleos y trabajos más esenciales para el sostenimiento de la vida. En una propuesta decrecientista justa, deberemos diferenciar trabajo y empleo, conectar trabajo y economía con la materialidad de la tierra completamente translimitada, comprender que trabajo no es empleo y que cada vez más gente esté excluida a los márgenes de la vida.

Los monocultivos del turismo, la construcción, la automoción, las grandes infraestructuras, son bases económicas fundamentales de la economía española que tienen que ser revisadas y, en esa revisión, deberemos recuperar otros conceptos que tienen que ver con lo comunitario, con las labores del campo y del monte, de la atención social y los cuidados, del mantenimiento y la rehabilitación. Una replanificación sostenible de nuestros territorios, pueblos y ciudades respetuosa con la naturaleza y sus límites. La reforma agraria y el reparto de la tierra también como manera de disponer de medios de vida suficientes. La protección al cultivo tradicional del olivar o la ganadería extensiva como ejemplos concretos.

También deberemos anticipar algunas cuestiones. Relocalización de la economía, priorización de sectores y bienes, redistribución de la riqueza haciendo dialogar la renta básica universal, las propuestas del trabajo garantizado y la reducción de la jornada laboral. Introduciendo también una mirada internacionalista que permita analizar y modificar en qué medida el modelo consumista del norte se benefician de una superexplotación en el sur global. Debemos ser realistas y decir lo que hay y lo que viene, para también reconfigurar el deseo inducido de consumo y las expectativas de querer satisfacer las falsas necesidades creadas por el sistema.

Unido a la crisis política y ambiental, nos encontramos con la crisis energética. Hemos entrado ya en una fase de declive en distintos combustibles y materiales que compromete el desarrollo económico y social tal como lo conocemos y que conlleva límites también a la expansión de las propias energías renovables. Sin obviar, por supuesto, su papel clave para entender numerosas tensiones geopolíticas.

Necesitamos abordar un modelo energético integral que permita dar respuesta a las necesidades sociales dentro del marco actual. Analizar qué avances en política energética a nivel local son clave para promover cambios que la sociedad asuma como propios. Debemos interiorizar que es fundamental reducir el consumo energético, ser creativo y creativas con las oportunidades que ofrece el sistema como el Pacto Verde Europeo y los Fondos de Recuperación para hacer acción climática y, a la vez, mantener cautela con los impactos posibles y actuales en el mundo rural, por ejemplo. Necesitamos anticipar las contradicciones en nuestro discurso y propuestas, entre las que se encuentra –y no es menor– la dimensión geopolítica de la Transición Ecológica que transforma nuestra dependencia de combustibles fósiles a una multidependencia de diversas materias primas.

La solución propuesta por los gobiernos es muy limitada. Tanto el Green New Deal como los planes de la Comisión Europea están alimentando las arcas de los grandes monopolios privados al redirigirse los recursos disponibles al sector privado en lugar de inversión directa por parte de las administraciones públicas.

La propia dinámica del capitalismo neoliberal de concentración de capital y de recursos humanos para su explotación con el mínimo de costes y el máximo de beneficios ha ido provocando el éxodo masivo de la población del medio rural a los centros urbanos y ha supuesto el vaciado del territorio de un tejido industrial y agroganadero a pequeña y mediana escala que daba opciones de vida en los pueblos. Es urgente un cambio de modelo agroalimentario que deje de concentrar en macroproyectos insostenibles para la sostenibilidad económica y ambiental la industria, las líneas de distribución y comercialización y la red de transportes, y que descentralice el sistema de producción de forma extensiva en el medio rural. El objetivo en última instancia debe ser la sostenibilidad social, económica y medioambiental, asumiendo retos como la seguridad y soberanía alimentaria, la preservación medioambiental, la lucha contra el cambio climático y la resiliencia frente a sus efectos, la revolución tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las energías renovables.

La movilidad geográfica y la desaparición del empleo tradicional a la que nos ha llevado la robótica y la tecnología, antes, y la inteligencia artificial, ahora, viene ligado al objetivo del capital de abaratamiento de costes y aumento de beneficios. Nuestra propuesta es clara: el empleo ha de adecuarse a las necesidades de la clase trabajadora y los beneficios que ofrecen estos avances tecnológicos han de redistribuirse socialmente.

El socialismo dentro de los límites del planeta, el único camino la transformación que propugnamos exige un Estado con un poder público fuerte, democrático y participativo, que se proponga intervenir para garantizar los derechos; para proteger particularmente los derechos de la mayoría social trabajadora; para establecer servicios públicos de calidad y universales, que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al ocio; para redistribuir la riqueza y las oportunidades. Para ello, es ineludible una verdadera planificación democrática de la economía que ponga la prioridad en las necesidades sociales de la economía y que tenga en cuenta los límites que la naturaleza nos impone. Y esa transición necesariamente debe desarrollarse desde la voz, la participación y la praxis del territorio y el medio rural en total alianza con los grandes núcleos urbanos.

En esta planificación democrática se debe incluir en qué condiciones, con qué materiales y con qué energía se desarrollan estas actividades y por supuesto cuál es el impacto que tienen sobre el entorno y las generaciones futuras. Para recuperar esta herramienta debemos acometer, las siguientes tareas:

Investigación y formación. Necesitamos recuperar el gran conocimiento generado durante todo el siglo XX y adaptarlo a los avances científicos y técnicos que se han producido en las últimas décadas para disponer de una propuesta solvente y viable, apoyándonos también en los avances, triunfos e ideas destacadas respecto a la planificación económica del siglo pasado.

Trabajo programático. Es necesario incorporar a los programas electorales en todos los ámbitos y candidaturas en las que concurrimos propuestas concretas y enfocadas a retos y problemas específicos de planificación democrática.

Trabajo institucional. Debemos ser capaces de implementar en las instituciones y especialmente a aquellas en las que ejercemos tareas de gobierno nuestras propuestas de planificación, demostrando que aportan soluciones para nuestros problemas de hoy.

Trabajo de concienciación. Debe ser una prioridad afrontar décadas de propaganda contraria a estos instrumentos para trasladar a la población la necesidad de recuperar la capacidad de tomar decisiones sobre aquellos elementos que tienen una importancia crucial en nuestras vidas y que hoy están en manos, no ya del mercado, sino de una oligarquía económica.

En definitiva, tenemos que liderar las propuestas transformadoras que eviten un cambio sin cambio, planteando una salida de la crisis rupturista y con propuestas radicales que trasciendan las dinámicas asistencialistas que se vienen dando hasta ahora. Nuestra apuesta es el socialismo, afirmamos de nuevo. En consecuencia, defendemos la participación, intervención y planificación democrática del Estado en la economía y la necesidad de reivindicar la nacionalización de sectores y empresas que son consideradas estratégicas para el país y esenciales para la vida de las personas. Un punto que, de hecho, ya viene recogido en la Constitución española.

IU debe plantear políticas activas de desmercantilización de la sociedad, ya sea a través de la creación de empresas públicas, ya sea recuperando empresas privadas que en su momento fueron públicas.

1.4. La crisis de la organización social

Las nuevas tecnologías relacionadas con internet supusieron una revolución civilizacional a la altura de la invención de la escritura y la imprenta, aunque todavía es pronto para que podamos ver con claridad la profundidad de su impacto histórico. Estas nuevas tecnologías han influido en el conjunto de la sociedad, desde la economía a nuestra forma de relacionarnos, y no han sucedido como un desarrollo técnico en el vacío, ni han sido asumidas como parte de un debate social, sino que se han circunscrito en el explosivo desarrollo capitalista del siglo XXI y se han impuesto de manera violenta y excluyente como parte de la organización del trabajo y de la sociedad.

El sector tecnológico de las comunicaciones, y específicamente en el ámbito del ocio y el entretenimiento, ha conseguido imponerse sobre el resto de los sectores económicos, llegando importantes empresas como las GAFAM (Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple y Microsoft) a la cúspide de las empresas más valiosas del mundo. Estos operadores hoy mantienen un oligopolio que les otorga una capacidad enorme para mediar en nuestras comunicaciones y organización social, por ejemplo, mediante censura política, silenciamiento (shadow ban), propaganda o desvíos interesados de atención con simples modificaciones de algoritmos.

Además, un riesgo masivo para la sociedad y el acceso a la información de la clase trabajadora es el que representa la Inteligencia Artificial (IA), ya que abre posibilidades de manipulación, vulneración de derechos y alteraciones a la imagen de las personas, poniendo el foco en el cuerpo de las mujeres. Debemos impulsar legislación y un control estricto sobre las manipulaciones mediática, la utilización de algoritmos en la discriminación interesada y en las administraciones de las empresas, los ataques personales basados en la Inteligencia Artificial, y no descuidar el auge y el potencial de la tecnología para dañar a la clase trabajadora.

Tenemos que prestar atención a la introducción de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana y limitar su uso a las parcelas que mejoren la vida de la gente, estableciendo un código ético estricto. Debemos promover la regulación de la misma en todos los ámbitos en los que seamos capaces para democratizar su uso, a fin de que las nuevas tecnologías, y especialmente el avance de la IA pueda encauzarse hacia una disrupción en favor de los intereses de las clases más desfavorecidas y en ningún caso promoviendo una nueva ley de la selva donde sólo saquen provecho las grandes empresas tecnológicas.

Hay patrones en esta forma de relacionarnos que están profundamente arraigados, pero otros están siendo modificados. La política está en la gente, por lo que ningún cambio en su forma de vivir nos es ajeno.

Las nuevas tecnologías han profundizado una crisis de autoridad en todos los ámbitos de la sociedad. El acceso inmediato a todo tipo de información ha devaluado la autoridad de quienes ostentaban una posición privilegiada en términos de legitimidad. El caso más evidente lo encontramos en el ámbito político, pues la autoridad de los políticos y las políticas, las instituciones y la propia democracia está en mínimos históricos. La democracia no satisface las necesidades vitales de la ciudadanía, los políticos y las políticas por norma general no defienden los intereses de las mayorías y la política no es un instrumento útil para lograr cambios reales. Esta es, al menos, una percepción generalizada que explica la crisis del sistema liberal-representativo. Se trata de una tendencia de décadas que viene profundizándose durante los últimos años.

Sin embargo, la crisis de la autoridad política no es la única, y puede que ni siquiera la más importante. Esta crisis de la autoridad tradicional es transversal y la podemos encontrar en todos los ámbitos de la sociedad en los que nos desenvolvemos. La encontramos en el cuestionamiento de los roles de la familia tradicional: antes la autoridad de padres y madres, especialmente del padre, sobre los hijos y las hijas era incuestionable, ya no. La encontramos en el cuestionamiento de los roles de la enseñanza: el alumnado es más descreído respecto al papel de los profesores y las profesoras. La encontramos, qué duda cabe, en el cuestionamiento de la información: la autoridad de los medios de comunicación clásicos está por los suelos. Y así sucesivamente.

La autoridad tradicional, jerárquica y en ocasiones reverencial, está en crisis. Esta crisis en el ámbito político se expresa de manera particular en una crisis de intermediación. Los instrumentos de intermediación que antes vehiculaban la política se encuentran en crisis: los partidos, los sindicatos (aunque en menor medida que durante la crisis de 2008) y los medios de comunicación, entre otros. El problema es que las alternativas a estos instrumentos tradicionales de intermediación no solo no están siendo más positivos, sino que en demasiadas ocasiones están siendo más nocivos.

No vivimos, exactamente, en una sociedad individualista: vivimos en una sociedad fragmentada en burbujas, y estas se encuentran cada vez más aisladas. Aunque es cierto que imperan los valores del individualismo, que dificultan la organización comunitaria y social. Burbujas cada vez más pequeñas, cada vez más herméticas y cada vez más aisladas, esa es la tendencia actual en el modo de organización social en el capitalismo contemporáneo. Nuestra tarea es organizar comunidad, estrechar relaciones sociales, en cuales la presencialidad debe volver a ser el método fundamental.

Tenemos la necesidad de democratizar la globalidad, esto es concebir la diversidad como motor de cambio social y no dejar que se homogeneice el universo, para que sea de manejo fácil de las culturas más poderosas. Cuando las distintas corrientes se sienten representadas, pero sobre todo influyentes en el desarrollo de estructuras mayores, estas estructuras se mantienen por redes democráticas activas, siempre reflexivas y críticas. Solo así se consiguen avances sociales sostenibles, pues hablamos de entramados solidarios y que mantienen su identidad.

La horizontalidad de la información, principalmente a través de las redes sociales, no está ayudando a frenar la proliferación de bulos. El vínculo directo de los hiperliderazgos con la ciudadanía no está democratizando las organizaciones políticas y sociales. El cuestionamiento de las élites científicas y académicas no está facilitando el acceso popular al conocimiento. La crisis de autoridad en general y de intermediación política en particular no traen necesariamente avances positivos. Al contrario, en términos generales parece que facilita la extensión del populismo reaccionario, de los bulos y el negacionismo. Si la autoridad democrática-representativa ha muerto, todo está permitido.

Tras los pasados años en que un liderazgo de amplia proyección mediática y social podía suscitar grandes apoyos por sí mismo, la evolución política está revalorizando algunos valores que antes se infravaloraban, como la implantación territorial, el arraigo organizativo o la inserción social. Estos atributos no garantizan el éxito político, pero su ausencia sí garantiza el fracaso.

La extrema derecha, en complicidad con los sectores más reaccionarios del sistema, intenta llegar a los desencantados de los partidos tradicionales y canaliza su frustración hacia abajo en lugar de hacia arriba. En Europa, se camufla en algunos países como un movimiento antisistema y adopta partes del programa social de la izquierda, aprovechándose de la profunda decepción que siente la población hacia los partidos e instituciones convencionales. Sin embargo, hay una gran

contradicción entre su discurso y sus acciones, ya que está vinculada estrechamente con las grandes fortunas y promueve políticas que las benefician.

Aunque todavía no se ha manifestado plenamente en nuestro país, podemos observar cómo en redes sociales hay un aumento en el discurso "antisistema", que cala entre la juventud, por parte de elementos de extrema derecha, a pesar de que partidos como Vox no adopten completamente esta retórica. Parecen ser una extensión más radical del Partido Popular.

Es en este contexto en el que apostamos por reforzar la organización. Actualmente el viento todavía sopla en la dirección contraria, pero cada vez se irá evidenciando más la necesidad de estrechar vínculos sólidos, pues solo estos pueden sentar las bases para los cambios reales. Las nuevas tecnologías en general y las redes sociales en particular son imprescindibles. Debemos seguir renovando nuestras formas de participación política, aprovechando todas las innovaciones tecnológicas disponibles. Sin embargo, esto no es incompatible con reforzar, al mismo tiempo, la esencia político-organizativa de la izquierda transformadora: la construcción de espacios de socialización con dinámicas, ritmos y métodos de participación propias.

Debemos crear o más bien actualizar (reformular y difundir) la existente "imagen de marca" y crear una política de medios armónica a todos los niveles; usando nuestras hojas de estilos y tipografías ("la izquierda") y creando un sistema de nombres en redes sociales común, realizando "rebranding" y empezando por crear cuentas en todas las redes sociales en cada ámbito sectorial o territorial y nombrando a responsables para que publiciten todas nuestras actuaciones en los distintos ámbitos de actuación.

La evolución de las condiciones de vida concretas de la inmensa mayoría de la ciudadanía dificulta enormemente la pertenencia a organizaciones o participación activa en movilizaciones o expresiones de conflictos, según hemos estado acostumbrados durante años. Muchas personas no tienen tiempo, fuerzas, o condiciones materiales para implicarse en la militancia social activa.

Una fuerza política que se declara defensora de las mayorías sociales no puede ignorar esta realidad. Izquierda Unida debe hacer esfuerzos por encontrar manera de hacerse visible para esas mayorías, y dirigirse a ese amplísimo sector de la sociedad, de manera que pueda ser vista como una herramienta útil para la mejora de sus condiciones de vida y el incremento de la conciencia político-social.

1.5. La crisis de los cuidados

Las feministas señalamos desde hace décadas que el mundo vive una crisis multidimensional, que tiene en la crisis de cuidados uno de sus máximos exponentes. Si entendemos los cuidados como un eje central de las políticas públicas, no podemos ignorar que estos se dan en permanente crisis, en un contexto en el que la transformación de las estructuras tradicionales, con el modelo de familia a la cabeza, ha estallado. Queda lejos el modelo, que era norma, de familia nuclear, obligada en el siglo XIX y XX, que imponía bajo el salario familiar aquella idea de que el hombre al trabajo y la mujer en casa –varón sustentador y ángel del hogar–, separando el mundo en dos esferas –público/privada y productiva/reproductiva–, indispensables para que la división sexual del trabajo funcionara al ritmo que el capitalismo marcaba.

Este modelo de familia, que ha sostenido durante siglos la violencia y la opresión contra las mujeres, ha experimentado cambios sustanciales a lo largo de las últimas décadas, hoy en día ampliamente aceptados en nuestra sociedad. Del modelo del varón sustentador se ha pasado a un modelo de dos sustentadores en el que, sin embargo, se mantiene aún mayoritariamente un

reparto de papeles diferenciado por género, que asigna una carga mucho mayor a las mujeres, quienes ven cómo todo el trabajo. La respuesta de los hogares a las tensiones generadas por la presión de cuidar ha sido la externalización de los cuidados –cuando se lo pueden permitir–, que pasan a inscribirse en los circuitos de la globalización debido a la contratación generalizada de cuidadoras extranjeras, lo que, además, fomenta la economía sumergida y favorece la explotación laboral de las mujeres, doblemente revictimizadas por el sistema patriarcal. Y es aquí donde las cadenas globales de cuidados se hacen protagonistas, de la mano de nuevas cuidadoras –siempre mujeres– que cuidan aquí a quien no puede dejar de ser cuidado, en un contexto además de envejecimiento de la población, mientras nadie cuida de sus familiares en casa. La división sexual del trabajo sigue funcionando como un reloj, al ritmo que el capitalismo marca.

El salario es la cantidad de recursos, en valor monetario, necesario para mantener la fuerza del trabajo del trabajador/a y su reproducción. En este sentido con la incorporación de la mujer al mundo laboral este axioma marxista se mantiene en el capitalismo actual, de manera que donde antes con un salario se cumplía el principio de mantener la fuerza del trabajo y su reproducción, ahora se necesitan dos salarios en la unidad familiar para cumplir el mismo rol.

La incapacidad para abordar la reorganización social de los cuidados que permitiera responder a las necesidades sin explotar a las mujeres continúa vigente en nuestra sociedad. Mientras se ha incidido mucho en la corresponsabilidad dentro de los hogares y se plantea como necesaria la de las administraciones, se ignora e invisibiliza totalmente la de las empresas.

Esto ha generado que resolver los cuidados se haya mantenido como función de los hogares aumentando su cobertura a través de la contratación generalizada de cuidadoras extranjeras atravesadas por una ley de extranjería injusta que las obliga a esta situación. Y apoyado por un insuficiente sistema público de cuidados que los garantice, articulado a través de un sistema de dependencia que precariza y de medidas descoordinadas para menores que no se articulan en un sistema de apoyo a la crianza real. El sistema capitalista necesita mantener diferenciados el sistema productivo y reproductivo para poder seguir aprovechándose de la división sexual del trabajo que el feminismo ha puesto en cuestión. Es imprescindible desarrollar una propuesta que integre ambos sistemas y de respuesta a las necesidades de cuidado con dignidad para revertirlo.

Además, el envejecimiento poblacional y el incremento de personas dependientes en el conjunto del Estado suponen un reto para las políticas públicas que no es ya un reto futuro, si no presente. La reciente subida de las prestaciones por dependencia es necesaria, pero muy insuficiente.

Por otra parte, la situación de los servicios de ayuda en el hogar es absolutamente precaria y no cubre las necesidades reales de la mayoría de la población. El envejecimiento conduce también a una realidad en muchos hogares en la que personas mayores cuidan de otras, dependientes o a casos en los que la soledad no deseada conduce a un estado de abandono a las personas mayores. Izquierda Unida debe abordar tanto desde el punto de vista del municipalismo, como de las competencias autonómicas y de Estado el modelo de cuidados que queremos como organización.

En este sentido, cabe recordar que la pandemia terminó de sacar a la luz las deficiencias de cuidados de larga duración recogidos en la Ley de autonomía personal y atención a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia (ley 39, diciembre de 2006). La falta de recursos públicos y el vacío económico para desarrollar plenamente la Ley de Dependencia, hace que este Sistema de Cuidados, se siga potenciando el obsoleto, injusto y discriminatorio Modelo de Cuidados Informal. Por ello necesitamos recursos públicos centrados en las personas para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, que permitan continuar con los proyectos de vida, vivir sin temor a la discriminación o pobreza, así como a la exclusión por el hecho de cumplir años.

También recursos públicos de proximidad, que apoyen la permanencia en nuestro entorno habitual, como la reorientación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y los servicios complementarios que permitan cubrir las distintas necesidades, así como residencias públicas con criterios de gestión sanitaria.

En el mismo sentido, en un contexto en el que muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha recortan en recursos públicos para la educación infantil, es fundamental seguir demandando una educación pública 0 - 3, así como otros recursos para la corresponsabilidad.

Además, debemos construir una organización valiente que pueda abrir debates y abordar temas que quizás estén fuera de lo popular y de la atención mediática, pero que no por ello son menos urgentes. Uno de estos temas es la violencia psiquiátrica, y sus prácticas abusivas. En este sentido, se deben, prioritariamente, rediseñar los espacios de hospitalización y la organización de profesionales y actividades, orientándolos hacia la acogida y lo comunitario y local.

2. NUESTRO PAÍS EN CRISIS

La evolución de la crisis de régimen

El concepto de «crisis de régimen», en boga especialmente durante los años 2013, 2014 y 2015, servía como traducción española del concepto gramsciano de «crisis orgánica». Con él, se enunciaba una ruptura más profunda que la crisis de hegemonía, la condensación de dicha ruptura a varios niveles: el social, el cultural, el político y el institucional. La crisis económica expulsó a amplios sectores del frágil consenso social, estos se desprendieron de las viejas ideas que articulaban el consenso cultural y eso acabó traducándose en la ruptura del consenso político, que se tradujo en la aceleración de la crisis institucional, esta con algunos ritmos y particularidades propias.

La evolución de la crisis económica (no tanto de sus indicadores «objetivos» como de sus implicaciones «subjetivas»), el agotamiento del empuje social, el reajuste del escenario político o la preeminencia de la cuestión «nacional», son algunos de los factores que explican la evolución de esa crisis de régimen hacia una crisis de Estado. Hablamos de crisis de Estado porque las grandes contradicciones del régimen se libran exclusivamente en su interior, en el ámbito institucional, acabando en la mayoría de las ocasiones en un enquistamiento institucional. Este enquistamiento es el resultado de una doble debilidad. Por un lado, las izquierdas y la sociedad civil no somos capaces de empujar las contradicciones para imponer una resolución democrática y, por otro lado, el Estado es incapaz de neutralizarlas completamente a través de la integración –o el aniquilamiento–.

En un momento en el que se producía una tímida apertura hacia soluciones políticas al encaje de las diversas realidades territoriales, para avanzar hacia relaciones más fraternas entre pueblos en nuestro país, ha aumentado la intensidad de la reacción desde un Estado profundo, antidemocrático, independizado de la ciudadanía, ejemplificado en un poder judicial determinado a seguir tensando las costuras de las instituciones al servicio de un proyecto reaccionario de país, y frente al que es necesario articular una respuesta organizada, plural, democrática y territorialmente diversa.

Y a pesar de ello, se ha establecido un diálogo complejo entre territorios y fuerzas políticas procedentes de diversas tradiciones, conformando una suerte de bloque democrático basado en la

plurinacionalidad, en el que derechos sociales y derechos nacionales van íntimamente vinculados y que, por tanto, está profundamente relacionado con el proyecto de país al que aspiramos.

La territorialización de la política es una de las claves más importantes para entender el transcurso de los acontecimientos políticos en nuestro país durante los últimos años. Una vez que se difuminó la esperanza constituyente para una reforma integral de país, la política se replegó hacia los territorios. No es casualidad que la bajada de la izquierda transformadora federal haya ido acompañada a partir de 2016 de una subida de las izquierdas territorializadas, sean nacionalistas, independentistas o regionalistas. Este proceso de territorialización ha revalorizado la cercanía y, con ella, la implantación. El problema de la izquierda federal es que desde hace años tiene muchas dificultades para recoger las particularidades territoriales. Esto, además de reforzar la implantación territorial, nos obliga a reforzar el posicionamiento político en los distintos territorios.

Vivimos inmersos en una realidad mestiza, marcada no solo por la plurinacionalidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad inherente al Estado español, sino también por una asimetría territorial, donde algunos territorios ejercen de fuerza centrípeta atrayendo hacia sí los recursos y, finalmente, también la población, mientras que otros no pueden garantizar los derechos de ciudadanía más elementales; y una asimetría política en la conformación de las estructuras del Estado, con una administración local infrafinanciada y demasiado a menudo desatendida, a pesar de ser la primera línea en la lucha contra la vulnerabilidad extrema en que vive una parte importante de la población.

En este contexto, la apertura de vías de solución y diálogo entre pueblos y la ciudadanía más organizada, el camino hacia la solución de algunos de los conflictos políticos que han marcado los últimos años, como el relacionado con la relación entre Catalunya y España, es vista por ese estado profundo como una amenaza a su proyecto de país reaccionario.

Debemos combatir contra quienes han instrumentalizado el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, desde la crítica al procés y la política procesista de bloqueo institucional desarrollada en Catalunya en los últimos años y que ha generado frustración en una parte importante de la clase trabajadora catalana y hartazgo en la mayoría de la sociedad. Amplias capas de la población han percibido esas soluciones como privilegios otorgados a costa del resto que se potencia y alimenta por quienes quieren debilitar al gobierno. Una amnistía acordada bilateralmente sólo para el proceso catalán, cuando hay miles de casos de represión que requieren de una rectificación política, puede generar un clima de desconfianza que dificulta la construcción de alianzas amplias en el seno de la izquierda, ante unas medidas orientadas no a la búsqueda de soluciones políticas sino a la continuidad del Gobierno.

Si bien no ha sido posible para el Régimen formalizar su recomposición con una amplia reforma constitucional o un pacto de época, hoy en día las instituciones de dominación del sistema capitalista y del entramado del Régimen del 78 aparecen fortalecidas.

Como hemos visto con especial claridad durante los últimos años, las grandes contradicciones que atraviesan la crisis de Estado tienen una difícil resolución «reformista», pues todas ellas implican un profundo desgarramiento en las entrañas del régimen: el modelo territorial, tanto para afrontar los retos inherentes de la realidad plurinacional como de la España abandonada (víctima de primer orden del centralismo), la democratización de algunos de los aparatos estatales como el judicial o la propia institución monárquica son algunos ejemplos.

Un poder judicial que actúa como un poder paralelo, apartado de la sociedad real, que se transmite de padres a hijos, que se autoerige como baluarte frente al progreso social y / o democratizador,

como reducto inmovilista defensor de sus intereses de clase y contrario, por tanto, al avance en derechos y nivel de vida de las mayorías sociales trabajadoras.

El mismo poder judicial que no ha dudado en su complicidad con la utilización de estrategias de lawfare con el objetivo de debilitar la fuerza social de estos liderazgos políticos, pero también de impugnar las políticas públicas defendidas de forma democrática por los espacios de la izquierda transformadora. En este sentido el compromiso de IU debe ser el de la democratización de la justicia para garantizar la igualdad de oportunidades y la democracia, así como el de activar mecanismos de reformas legislativas que eviten el uso inapropiado de la justicia contra las políticas transformadoras.

Sin embargo, el problema de la monarquía no es sólo interno, pues no bastaría con una reforma en clave de regeneración: el problema de la monarquía es que es el broche de todas las debilidades del propio Estado en tanto que es la representación última de la organización de los poderes en nuestro país.

Así pues, hablar de crisis, sea crisis de régimen o crisis de Estado, es hablar de republicanismo, pues este debe ser un proyecto de renovación plurinacional-popular que, en última instancia, debe «hacerse Estado» (en el sentido más amplio del término) como tarea ineludible en el proceso de consolidación del «bloque histórico».

La verdadera dimensión política y social de la República es la construcción desde el pueblo y para el pueblo, desde la reivindicación de nuestras particularidades y la diversidad que conforma la sociedad y el país. La República es una estructura abierta y flexible, cambiante a las exigencias de las personas y de los pueblos y cuyo nexo es la solidaridad, la libertad para decidir y la igualdad como fin. Se trata, en definitiva, de construir un sistema integrador desde la diversidad, que acerque la Constitución a la ciudadanía de una forma democrática y recuerde que los verdaderos garantes de nuestra Democracia somos las personas que vivimos en ellas.

España feminista

¿Es España un país más feminista hoy? Desde Izquierda Unida consideramos que sí, que más allá de la reacción patriarcal, que ha sido y es enorme, hay un calado feminista en la sociedad que hará difícil en el corto plazo que se den retrocesos en derechos. Siendo así, se vive con preocupación la clara intención de los gobernantes más conservadores de empezar los recortes siempre por los derechos de las mujeres, que acaban siendo –porque el patriarcado así lo manda– el mejor indicador del avance o retroceso de las democracias. Sirva Argentina y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que tanto costó conquistar, como ejemplo.

En el ámbito del conflicto social, el feminismo ha continuado siendo uno de los motores principales de movilización en nuestro país. Cada 8 de marzo, 25 de noviembre o 28 de junio en el caso de las personas LGTBIQA+, las movilizaciones han sido masivas.

Sin embargo, el intento de romper el movimiento feminista del 8M, el que tiene un carácter más popular y autoorganizado, que se llevó a cabo mediante la ofensiva contra las personas trans no parece que vaya a acabar una vez aprobada la ley, y demostrado que las tesis del feminismo transexcluyente eran falsas. El movimiento feminista tiene una agenda compartida en la que es fundamental reiterar el compromiso de Izquierda Unida con el abolicionismo de la prostitución, un abolicionismo que garantice a las mujeres en situación de prostitución oportunidades y derechos para dejar el sistema prostitucional. Este sistema es la expresión más cruel y violenta del

patriarcado, la que permite la cosificación de nuestros cuerpos. Mientras se pueda comprar el cuerpo y la libertad sexual de una mujer la igualdad será imposible.

Por todo ello, las mujeres feministas de IU reivindicamos el feminismo de clase, que pone en el centro a millones de mujeres con trabajos precarios, empleadas de hogar, cuidadas, camareras de pisos, etc. El feminismo socialista nos enseña que hay que aprender de la historia de lucha de las mujeres trabajadoras por su emancipación de clase y de género y recuperar el legado que las mujeres marxistas han aportado a la historia del feminismo.

El otro objetivo irrenunciable de la lucha feminista es acabar con la violencia de género que se materializa en feminicidios, violencia vicaria y agresiones sexuales, así como también en la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler.

Ante el crecimiento de la violencia vicaria exigimos que las medidas de protección de las mujeres y alejamiento de los maltratadores se amplíen a sus hijos e hijas, retirando la patria potestad, la custodia compartida y el derecho a las visitas: el maltratador no es un buen padre.

En la batalla cultural por los consensos sociales el feminismo continúa ocupando un lugar privilegiado por su respaldo y su cuestionamiento de los privilegios, lo que supone uno de los frentes de confrontación con las fuerzas reaccionarias. Además de que los derechos conquistados son puestos en cuestión de manera continuada.

Desde una perspectiva feminista somos conscientes de que la situación y los derechos de las mujeres se articulan con otros múltiples factores diferentes que se conjugan para aumentar la vulnerabilidad y opresión, además de que ser mujer no es una categoría única. Todo esto nos lleva a exigir la necesidad de integrar las luchas y dar respuesta de manera global, incorporando una alternativa que responda a todas las realidades que necesitan transformarse. Estamos muy lejos de transversalizar el género, pero es una dirección política a la que no renunciamos y sobre la que continuamos trabajando en un contexto donde garantizar la paz y las condiciones materiales, donde se incluye el planeta, son requisitos básicos para desarrollar cualquier otro derecho a futuro.

Desde Izquierda Unida debemos impulsar la visión estructural de la violencia machista en sus múltiples vertientes para evitar el marco que pretende convertirla en una cuestión individual y de confrontación entre hombres y mujeres que permita remover las lógicas que la perpetúan y posibilitar la construcción de entornos seguros que la invaliden.

Poner el foco en el acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo es incorporar esta cuestión a los ámbitos productivos que quieren mantenerse al margen, salvo medidas estéticas, de la necesidad de incorporar la visión feminista en el sistema productivo. También el feminismo supone un cuestionamiento de las dinámicas organizativas y de ejercicio del poder que debemos concretar en nuestra organización para ser una herramienta útil de +transformación social.

España diversa

IU ha sido, es y será punta de lanza en la defensa de la diversidad y los derechos de ciudadanía. Entre otros, los avances en políticas LGTBIQA+ y antirracismo en los últimos años han sido importantes, pero no suficientes. Seguiremos avanzando en el reconocimiento y en la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación

Nuestro proyecto de país: a por la Tercera República

En Izquierda Unida recogemos con orgullo el hilo rojo de la tradición emancipatoria en nuestro país y, muy especialmente, la bandera tricolor. Sería un error desprenderse de él, pero además sería un ejercicio estéril, pues no podemos hacer política partiendo de un folio en blanco o en un espacio etéreo ajeno a las particularidades que los surcos de la historia dejan con tesón tras de sí. La estrategia populista que trata de desprenderse de todos los elementos que puedan suponer una rémora ideológica se demostró errónea no solo por cortoplacista, sino por ineficaz. La trayectoria de Ciudadanos es un ejemplo paradigmático del imposible liberalismo español, es decir, de cómo un proyecto político acaba basculando hacia las bases sociales y culturales más sólidas sobre las cuales puede apoyarse. Nunca es, sólo, una cuestión de voluntad, como ejemplifican la deriva derechista de Ciudadanos o la deriva hacia el infantilismo de izquierdas de Podemos.

Un republicanismo que pretendiera partir de cero sobre la base de significantes «vacíos» y «ganadores» podría tener un relativo recorrido a corto plazo, pero estaría condenado al fracaso porque, incluso en el mejor de los escenarios posibles, podría ser fácilmente neutralizado a través de la integración. No hay atajos posibles: el republicanismo debe ser un proyecto profundo e integral de sociedad política que interpele al conjunto de contradicciones y poderes del Estado (siempre desde una lectura amplia del concepto, nunca «instrumentalista») y arraigue en las bases emancipatorias del hilo rojo y tricolor.

Ahora bien, de nada sirve evitar la tentación populista si caemos en su contraparte izquierdista-historicista. Podemos afirmarlo con claridad: el eje central de un republicanismo español verdaderamente popular no puede ser el reconocimiento de una etapa y un proceso histórico que sirven como pulsión movilizadora únicamente a una minoría militante. Ese republicanismo quedaría reducido a un movimiento memorialista que, siendo este imprescindible, por justicia hacia los que lo dieron todo por defenderla y por didáctica al permitirnos entender cómo están constituidos todavía los poderes mediáticos, económicos y judiciales que mantienen el régimen del 78, es otra cosa distinta. Imprescindible, complementaria, pero distinta. El principal problema de esta tentación izquierdista es que acaba reduciendo el republicanismo a una propuesta maximalista, esto es, al resultado de la frustración por incapacidad que busca poco menos que un milagro. Es una respuesta lógica, por fácil y accesible, pero errónea, pues solo consigue aumentar la distancia entre las clases populares y el republicanismo.

Para Izquierda Unida, es un objetivo concretar el proyecto de la tercera república para el medio plazo, la tarea es conectar ese hilo rojo y tricolor conformado por las luchas democráticas, populares y emancipatorias con otros elementos que puedan ahormar un proyecto amplio y diverso, pues solo así el republicanismo será realmente popular. Los republicanos y las republicanas y los monárquicos compartimos una debilidad: la ausencia (relativa) de transversalidad. Esto no supone ningún problema grave para la monarquía porque cuenta con poderes más que suficientes para mantenerse por mera inercia, es decir, por la ausencia de una alternativa más sólida. Sin embargo, para los republicanos y las republicanas es un problema mayor. Hablar de republicanismo es hablar de alianzas.

La República como proyecto integral de país, como proyecto de renovación plurinacional-popular

El republicanismo español siempre será mayoritariamente, pero no exclusivamente, de izquierdas. Sin embargo, reducirlo a una propuesta más dentro del catálogo izquierdista sería un ejercicio de autocomplacencia poco honorable. La vocación de un proyecto plurinacional-popular

es más ambiciosa, pues pretende ampliar el margen político-institucional y el margen de influencia social.

La fuerza revolucionaria de la izquierda no se puede medir por su beligerancia retórica, estética o identitaria, sino por su capacidad a la hora de hacer suyos el amplio conjunto de injusticias, problemas y anhelos de las clases populares. Es precisamente lo contrario de lo que pregona un infantilismo de izquierda, pues de lo que se trata es de ampliar la lucha política también allí donde las contradicciones inherentes del capitalismo no se expresan de forma explícita, como sí lo pueden hacer en una fábrica o en un parlamento.

Así pues, el republicanismo español no puede ser únicamente una forma de Estado ni la respuesta a la crisis territorial. Nos atrevemos a formularlo de la siguiente manera: la República debe servir para eliminar privilegios por razón de clase o cualquier otra circunstancia, y que el capital común redunde en beneficio de todo el mundo, para que la clase trabajadora y los sectores populares vivan un poco mejor. Esta debe ser la idea central que atraviese el discurso republicano. El discurso de la izquierda está lastrado en demasiadas ocasiones por una limitación arrastrada por el marketing tradicional que consiste en centrarse en el qué y en el cómo. El discurso republicano debe centrarse, por el contrario, en el por qué y en el para qué. El qué y el cómo nos sumen en una tediosa discusión institucional y jurídica de escaso interés ciudadano. Precisamente, uno de los objetivos es superar esa reducción del republicanismo en dos marcos institucionales: el de la jefatura del Estado y el del encaje territorial. Si la República servirá para que las clases populares vivan un poco mejor, el republicanismo debe ser más amplio e integrador.

Si se asume el republicanismo desde estas coordenadas, las organizaciones políticas republicanas debemos adaptarnos a tamaños objetivos porque una maquinaria electoral, por ejemplo, puede servir para encarar con mayor virtud un ciclo electoral, pero no para construir republicanismo. El principal problema de la izquierda y, no por casualidad, del republicanismo, es que no somos capaces de superar las estrecheces institucionales en las que se encuentra enclaustrada la política. Así pues, la política se encuentra alejada de la cotidianidad de una ciudadanía que, por norma general, repele automáticamente toda manifestación explícitamente política-partidista.

Si nuestra acción política se circunscribe a los ámbitos institucional y electoral seremos incapaces de formar parte de la «experiencia» de las clases populares. Nuestro principal objetivo es la inserción en la cotidianidad de las clases populares y en la sociedad civil, esto es, en el conjunto de espacios en los cuales se reproduce ideología normalmente de manera aparentemente «apolítica».

Tanto la izquierda como el republicanismo debemos fortalecer nuestras bases sociales. De nuevo, no hay atajos: inserción social y arraigo territorial. A nadie, especialmente en una organización municipalista como Izquierda Unida, se le escapa la importancia del municipalismo en un país como el nuestro. Por ello, durante los siguientes años redoblabremos nuestros esfuerzos para reforzar el carácter municipalista de Izquierda Unida. Lo haremos reforzando la formación acerca de lo que significa el municipalismo como defensa de la descentralización del Estado. España será republicana cuando haya un militante en 8.000 municipios. Extender la lucha político-cultural fortaleza organizativa. Es relativamente fácil colocar unos marcos discursivos en la televisión y en los principales medios de comunicación, pero no lo es desarrollar una política de las «cosas pequeñas» que conforman la vida cotidiana de la clase trabajadora y los sectores populares. El republicanismo debe conectar con las condiciones sociales y elevar todos los problemas,

injusticias y anhelos, por mundanos y modestos que sean, a la dimensión «nacional», es decir a la profundamente política.

No se trata de desvelar una verdad, de quitar la venda de los ojos a aquellas personas que, cegadas por las gafas de la falsa conciencia, son incapaces de ver la realidad objetiva. No hay nadie en nuestro país que no relacione la monarquía borbónica con la corrupción o el parasitismo. De lo que se trata es de construir un proyecto alternativo, propio, capaz de generar otros imaginarios, otros afectos y otras perspectivas. La monarquía se encarga por sí misma de generar rechazo, el eje central del republicanismo no pueden ser los defectos de la monarquía. No hay un problema de ignorancia respecto a estos, sino un problema de cinismo que solo puede ser superado por un proyecto republicano atrayente.

Ambos objetivos sólo podrán alcanzarse con el necesario rearme del proyecto programático y el impulso de Izquierda Unida como organización referente de la mayoría de la izquierda con visión de Estado.

República federal, plurinacional, laica y solidaria

Cuando hablamos de republicanismo español como proyecto de renovación plurinacional-popular hablamos, sin duda, de un republicanismo federal, pues no entendemos la República como la mera suma de los distintos territorios con sus respectivas particularidades, lo cual supondría, en la práctica, más allá del carácter electivo de la jefatura del Estado el reconocimiento de la ausencia de un proyecto propio. sino de España como un país plurinacional que defienda la laicidad del estado y se articule en torno a unos servicios públicos accesibles, fuertes, gratuitos y de calidad que garanticen la plena igualdad efectiva de sus ciudadanos mediante políticas de redistribución de la riqueza, políticas feministas de igualdad y por supuesto que garantice el pleno empleo y a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de todos sus habitantes y en particular la clase trabajadora, y a día de hoy esta afirmación no puede encontrar objeciones en el ámbito de la izquierda. El republicanismo español parte de este reconocimiento y apuesta por un proyecto compartido que va más allá de la suma jurídica de las distintas naciones. Defender lo común a todos los pueblos de España es la base para impulsar ese proyecto compartido más allá de identidades territoriales y coloca a la izquierda en disposición de disputar un proyecto de país frente a las propuestas de las derechas. Esta segunda parte es la principal tarea pendiente porque no solo nos dirigimos a la población de Catalunya, Euskadi o Galicia, sino que nos dirigimos al conjunto de la ciudadanía de todo el país, pues nuestro proyecto es estatal. Es imprescindible articular alianzas entre la España plurinacional y la España del interior, la abandonada y la rural. La necesidad de descentralización es uno de los nexos en común. La aspiración de avanzar hacia un país más más justo y más fraterno.

Un país más justo porque el republicanismo redefine el concepto de pueblo, en constante disputa, como la ciudadanía que vive de su trabajo. Frente al patriotismo de las derechas, en Izquierda Unida entendemos que el cariño a nuestro país es el cariño a la igualdad: la base de la democracia. Y un país más fraterno porque el republicanismo significa rebelión y emancipación, la unión de la ciudadanía libre en condición de tal. Porque la libertad exige instituciones sociales que garanticen una base material de existencia para que no sea una ficción jurídica.

No son pocos, ni fáciles, los retos del republicanismo español y de la izquierda: asunción del conjunto de problemas de la ciudadanía, inserción en su experiencia cotidiana, extensión de la lucha político-cultural, construcción de bases sociales sólidas, consolidación de un proyecto

integrador de país generador de afectos propios, articulación de alianzas amplias y un largo etcétera. Para Izquierda Unida, el republicanismo es más que una bandera o un eslogan, por eso asumimos estos retos y trabajaremos ajustando nuestros medios para que, más pronto que tarde, España vuelva a ser una República democrática en la que la clase trabajadora y los sectores tengan más derechos y vivan mejor, vivan bien.

Por eso, y para huir de discursos que relacionan la República como marco simplemente nostálgico debemos de volver a incidir en el trabajo y alianzas para la construcción de un proceso constituyente que con nuestro modelo republicano de base pueda superar la Constitución vigente.

2.1. El marco político-estratégico del Gobierno de coalición

El 23 de julio del año pasado logramos frenar in extremis el empuje reaccionario y revalidar, no sin dificultades, el Gobierno de coalición. La segunda edición de este cuenta con bases políticas, institucionales y sociales más frágiles que el primero, pero también cuenta con una oportunidad privilegiada: se enmarca en la crisis de Estado y, por tanto, tiene la posibilidad de librar batallas desde espacios institucionales privilegiados para la lucha. Evidentemente el objetivo más acuciante del Gobierno es la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares, pero no solo: el Gobierno de coalición debe asumir como objetivo estratégico la alteración de la selectividad estratégica del Estado, esto es, de sus dinámicas e inclinaciones que hacen que, por norma general, los conflictos se resuelvan de manera beneficiosa para las oligarquías.

Para IU estar en el Gobierno es una herramienta que ha supuesto mejoras en la vida de la gente, pero en ningún caso debe plantearse como objetivo en sí mismo o como excusa para alejarnos progresivamente de nuestro programa y objetivo.

El nivel actual de la tensión discursiva de la derecha genera un contexto en el que se hace más complejo trasladar nuestros mensajes. Es necesario hacer frente al discurso de la derecha a la vez que se superan las limitaciones derivadas de la correlación de fuerzas y la propia naturaleza socialdemócrata del PSOE. La defensa acrítica del gobierno de coalición puede facilitar que cale el discurso de la antipolítica que practica la derecha y la extrema derecha para presentarse como única alternativa real.

Partiendo de este marco estratégico y del trabajo realizado en la Asamblea y en la legislatura anteriores, mantenemos estos cinco objetivos que desde Izquierda Unida intentaremos que el Gobierno de coalición haga suyos:

- Poner en marcha una agenda legislativa de avances que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Tras la década de la gestión neoliberal marcada por los retrocesos y la pérdida de derechos, el Gobierno de coalición debe consolidar los avances de la legislatura anterior y conseguir nuevas conquistas que confirmen a nuestro país como una anomalía positiva también en términos de gestión. La mejor manera de confrontar a las derechas radicalizadas es revalorizar la política, y esto solo será posible si demostramos con más determinación que esta puede ser un instrumento útil al servicio de la ciudadanía. Más derechos laborales, un refuerzo de los servicios públicos o un nuevo tejido productivo son algunas de las necesidades de las que el Gobierno de coalición debe hacerse cargo.

Una agenda legislativa de avances transformadores nos permitirá ampliar el margen de maniobra y estrechar alianzas imprescindibles para garantizar la estabilidad del Gobierno y el cumplimiento de su compromiso programático.

- Reforzar la batalla cultural para redirigir el sentido común hacia la izquierda.

Como aprendimos durante la última legislatura, no bastará con una buena gestión de gobierno. Toda la acción de gobierno debe tener el objetivo transversal de avanzar culturalmente hacia posiciones democráticas y populares para combatir la ofensiva reaccionaria. En esa dirección, defenderemos e impulsaremos el cumplimiento y desarrollo de las políticas de Memoria Histórica y Democrática reflejadas en el texto de la ley de Memoria Democrática de 2022.

Las derechas se alimentan de un ambiente intoxicado por la antipolítica y la desconfianza colectiva. El Gobierno, sus instituciones y sus avances deben asumir la tarea de reconstruir una visión del mundo y un proyecto de país progresistas.

Así pues, la acción de gobierno no se medirá solo en términos administrativos, sino también en términos culturales: será exitoso si es capaz de redirigir el sentido común hacia la izquierda para acompañar la puesta en marcha de políticas transformadoras y servir como elemento corrector ante posibles retrocesos.

Batalla cultural que no puede ni debe darse solamente desde la acción de gobierno, sino que debe darse a todos los niveles de la organización, para lo cual la acción política de nuestras representantes en las instituciones deben estar mejor comunicadas y coordinadas con los documentos y la base militante, empezando por un verdadero y profundo debate sobre las políticas que se hacen y los documentos que se aprueban y que dejen de ser unos documentos cerrados sobre los que, en el mejor de los casos, podemos emitir un voto cada cierto tiempo.

- Avanzar en la construcción de nuestro proyecto de país.

Acabamos de analizar la crisis de régimen y su mutación hacia una crisis de Estado en la que la cuestión nacional y territorial juega un papel fundamental. La única manera realmente efectiva de luchar contra las derechas es confrontando su proyecto de país reaccionario con nuestro proyecto de país integral. Todas las problemáticas y contradicciones que atraviesan el escenario político no solo no son incompatibles, sino que deben ser recogidas y elevadas al proyecto de país republicano que hemos definido. Necesitamos democratizar el Estado para alterar su selectividad estratégica, pero también dotar al republicanismo de una expectativa para vivir mejor.

Así pues, el republicanismo español no puede ser únicamente una forma de estado, necesitamos un proyecto de país capaz de generar esperanzas en una vida mejor y que ponga en el centro las necesidades e intereses de las clases populares, construido desde un Gobierno en su composición y acción avance hacia la superación de las lógicas propias de mayorías y minorías

- Fortalecer los espacios conjuntos de convergencia política, institucional y social.

Para resistir mejor los ataques de la derecha radicalizadas se necesita que la izquierda transformadora ejerza como una base política y organizativa sólida mas allá del ámbito institucional. La posición institucional que ocupa Sumar tanto en el Gobierno de coalición como en el parlamento debe traducirse en recursos para una mayor coordinación estratégica y una consolidación por debajo de los espacios de convergencia.

- Construir alianzas sociales, reforzar los movimientos sociales y articular sociedad civil.

Las bases sociales del Gobierno de coalición son, como hace cuatro años, débiles. La fatiga, la merma de expectativas o la división son algunos de los elementos que explican que la situación por abajo de las bases sociales de la izquierda no sea ostensiblemente mejores que por arriba, en el ámbito político-institucional. Sin embargo, tanto el Gobierno como la izquierda política necesitamos contrapoderes con tiempos y dinámicas propias, ajenas a los ritmos siempre frenéticos de la coyuntura institucional.

La pérdida del Ministerio de Igualdad implica grandes riesgos para el avance de las políticas feministas en nuestro país. En primer lugar, porque dificulta el despliegue de las políticas públicas feministas definidas en las leyes, estrategias y planes del anterior Ministerio de Igualdad de Unidas Podemos, y en segundo lugar, porque el PSOE quiera recuperar la agenda más clásica –y blanca de clase media– del feminismo, situando como centrales –y únicas– cuestiones como la paridad o la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas.

El feminismo de la cuarta ola, en el que nos hemos referenciado en los últimos años en Izquierda Unida, que movilizó a millones de mujeres en las huelgas feministas en todo el mundo, que amplía sujetos y derechos, debe seguir siendo central en la construcción de la agenda feminista, también institucional.

En este sentido, desde Izquierda Unida prestaremos mucha atención tanto al aterrizaje concreto de las políticas diseñadas en el mandato anterior (centros de crisis de 24 horas de la ley de libertad sexual, acceso a derechos sexuales y reproductivos de la ley de salud sexual y reproductiva, articulación de la agenda de lucha contra las violencias machistas incluyendo todas las violencias, también la económica y las institucional, etc.), como al despliegue de aquellas políticas palancas, como la ley de cuidados, que llevan el sello de Sumar en el acuerdo de Gobierno de coalición, y que son indispensables para seguir avanzando en el horizonte de un Sistema Estatal de Cuidados que resuelva desde lo público esa crisis de cuidados que es imposible de resolver desde lo privado. Asimismo, como organización, seguiremos posicionándonos a favor de la abolición de la prostitución y contra los vientres de alquiler.

- Ejercer la capacidad crítica y de decisión, de modo que nos permita marcar perfil propio en temas centrales de nuestra política, como el desarme armamentístico, tanto en España como en Europa y la defensa de los Derechos Humanos, pudiendo expresar nuestro posicionamiento contrario a las decisiones que los contravengan.

3. REFORZAR IZQUIERDA UNIDA ES REFORZAR LA IZQUIERDA SÓLIDA FIABLE Y CERCANA; REFORZAR IU ES REFORZAR LA IZQUIERDA RUPTURISTA Y DE CLASE

En este apartado desarrollaremos la propuesta para avanzar hacia una Izquierda Unida más fuerte, más útil y mejor posicionada en los contextos previamente estudiados

3.1. Evolución de la última década y desde la última Asamblea

Asamblea tras Asamblea Federal hemos analizado los errores que habíamos realizado en el desarrollo de Izquierda Unida como movimiento político y social. En las dos últimas Asambleas Federales hicimos un balance autocrítico de los últimos 30 años, pero también destacamos las fortalezas y los aciertos que tuvimos, los cuales nos han permitido llegar hasta aquí. A raíz de esos análisis hemos introducido

cambios importantes que han mejorado el carácter de Izquierda Unida como movimiento político y social y han permitido que la organización soporte un ciclo político convulso y que encaráramos en unas condiciones desfavorables.

En el documento de la XII Asamblea Federal decíamos: Estos cambios organizativos se correspondían con unas tesis políticas que planteaban la necesidad de tener más capacidad de intervención en la sociedad, para no solo obtener más representación electoral sino para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Para ello entendíamos que el trabajo en espacios unitarios y en luchas concretas nos fortalecía como organización y nos permitía construir unidad popular desde lo concreto. En este trabajo era evidente que necesitábamos ser coherentes, hacer lo que decíamos o, si se prefiere, ser lo que decimos ser: clase y pueblo.

El trabajo realizado desde la XII Asamblea ha sido muy importante para poner el esfuerzo de la organización en construir comunidad en Izquierda Unida y con nuestro entorno. La campaña de afiliación (cuidar a nuestra militancia), la guía de comunidad, la guía de usos de sedes y el desarrollo de talleres en las Federaciones ha sido una apuesta por poner el énfasis en el refuerzo organizativo desde la creación de comunidad y la inserción de la organización en la vida de sus barrios y sus municipios.

El trabajo específico desarrollado en el municipalismo ha sido otro de los ejes a través de los cuales hemos intentado reforzar la organización y la generación de comunidad. Un año antes de las elecciones municipales se realizó toda la planificación del Plan de Acción para trabajar las elecciones municipales. El conjunto de responsabilidades enfocó su trabajo en dichas elecciones para aprovechar la oportunidad que nos daba una de nuestras mayores fortalezas: la capilaridad territorial y el arraigo municipal.

La Escuela de formación en Mieres en mayo de 2022 fue un ejemplo de esa apuesta: una apuesta por lo cercano y por el trabajo colectivo con el conjunto de Federaciones y de municipios. Dicha Escuela fue el inicio de talleres de cara a las elecciones municipales que se celebraron durante un año en todas las federaciones y en los que participan más de mil personas. Aprovechamos la ocasión para tener un recuerdo para nuestro Alcalde fallecido, Aníbal Vázquez, y su contribución para que dicha escuela fuese un éxito.

En ese año de preparación de las elecciones municipales utilizamos varios formatos de acercamiento con nuestra base. Desde entonces hasta hoy hemos realizado tres formularios distintos con los que hemos obtenido casi 4.000 respuestas que nos han ayudado a entender Izquierda Unida desde abajo. Este trabajo ha resultado un primer paso que facilitará el avance para fomentar la toma de decisiones basadas en datos.

La creación del grupo MAYO 2027 va en la misma dirección: mejorar la interlocución directa entre la gente de la organización a todos los niveles. Seguiremos reforzando el grupo, sumando recursos y servicios para mejorar la gestión cotidiana a nuestra militancia y a las personas que nos que representan en las instituciones.

Además de este refuerzo de la organización, desde la perspectiva de generar comunidad dentro y fuera de Izquierda Unida, de reforzar los lazos con nuestro entorno y con el pueblo, hemos realizado un trabajo específico en afiliación y en el ámbito externo.

En cuanto a la parte afiliativa, la campaña de afiliación, el envío del carné, la comunicación directa de los acuerdos de los órganos ha sido otro de los avances de este mandato. Un trabajo específico en afiliación para cuidar a nuestra gente, el seguimiento de las altas y bajas, el apoyo y la formación a las

Federaciones en el uso de la UAR, nos han permitido mejorar el trabajo con la afiliación. A pesar de ello no hemos sido capaces de revertir la tendencia de descenso afiliativo que se da en Izquierda Unida desde hace más de 11 años (según los datos de los que disponemos).

Seguimos pensando que para reforzar la organización es necesario que seamos útiles para mejorar las condiciones de vida de las personas en nuestro entorno y que nuestros espacios sean espacios de socialización más allá de las reuniones estrictamente políticas. Pero es imprescindible cuidar a nuestra afiliación, que tenga la información y que pueda participar en la organización, esta responsabilidad es compartida entre todas las estructuras y debemos seguir mejorando.

Uno de los objetivos que no hemos podido cumplir ha sido la puesta en marcha de una guía de servicios para la afiliación, que pudiese poner en contacto a nuestro entorno social, cultural y económico con nuestra afiliación.

A nivel externo se ha reforzado el trabajo con los sindicatos, movimientos sociales y en las movilizaciones. Se valora muy positivamente la creación de la responsabilidad de conflictos laborales por el trabajo realizado en los propios conflictos, de apoyo a la red de sindicalistas y de conexión con las estructuras sindicales. Obviamente se ha mantenido la presencia de la organización en las movilizaciones más genéricas de estos años, como la defensa de los servicios públicos (sanidad, educación, etc.) y las movilizaciones en defensa de la paz y del pueblo palestino recientemente.

Debemos destacar en el documento un elemento positivo, que nos ha permitido reforzar el posicionamiento de la organización y darnos voz propia fuera de la institución: la recuperación de una figura de portavocía o coportavocía. El trabajo de portavocía nos ha permitido trasladar la posición de la organización con claridad y expresar las posiciones de la organización con autonomía respecto a nuestra presencia en el gobierno.

En cuanto a la gestión económica seguimos con una política de austeridad económica. Hemos seguido reduciendo la deuda, conteniendo el gasto y estableciendo un salario máximo. La gestión de la contabilidad ha seguido mejorando y estamos en un proceso de ser más transparentes y eficientes a la vez. La coordinación con las Federaciones y el cumplimiento de la normativa han mejorado y hemos de seguir siendo extremadamente escrupulosos con los procedimientos.

Hemos avanzado hacia una organización más federal y con más participación de los partidos y organizaciones que la integran. Izquierda Unida hoy es más federal y coherente, gracias a la puesta en marcha de mecanismos para evitar incumplimientos de acuerdos federales o vulneraciones de los derechos de la afiliación.

Sin embargo, no nos conformamos y, por lo tanto, hacemos un balance autocrítico para seguir avanzando más y mejor. Construir un proyecto federal de país pasa por mejorar la federalidad de nuestra organización. Para ello es necesario avanzar en la construcción de diagnósticos compartidos e integrales y propuestas que sean acordes con la realidad de todos los territorios para que la síntesis sea válida para todos y los acuerdos federales no sean directrices incumplibles.

Para ello en esta asamblea acordamos la creación de un nuevo órgano, el Consejo Federal que permitirá la presencia en los debates y posicionamientos políticos de todas las federaciones para poder trasladar la realidad territorial y afinar en la respuesta.

3.2. Propuesta político-organizativa

3.2.1. Organización y arraigo

Izquierda Unida es una organización que, gracias a su militancia y a su estructura, tiene implantación social y territorial, sobre todo municipal. En la etapa anterior ya se hizo un trabajo intenso en política municipal para reforzar la presencia municipal de la organización. En esta etapa proponemos crear un área de trabajo específica en la Colegiada Federal de Municipalismo que garantice una coordinación permanente de las iniciativas municipales, un trabajo con la FEMP y el grupo que lideramos, y por último coordinar la difusión y extensión de buenas prácticas que se hayan realizado en municipios donde tenga presencia Izquierda Unida.

Debemos trabajar en establecer los mecanismos necesarios que permitan trasladar nuestra propuesta política también allí donde nos hemos quedado fuera de las instituciones. Establecer mecanismos y fórmulas que permitan compartir y replicar el trabajo institucional también desde fuera de ellas que permitan, sobre todo a las Asambleas de base, seguir vinculadas a la institución más cercana. Debemos trabajar por reforzar uno de los puntos fuertes que siempre han caracterizado a nuestra organización como es su carácter municipalista.

La vinculación con la responsabilidad de comunidad, que se creó en la anterior etapa será un elemento estratégico del trabajo municipal. La militancia y las asambleas deben sentir que las estructuras de dirección en los distintos niveles son útiles para ellos y ellas. En este sentido, el proyecto de Comunidad es una herramienta muy útil e interesante para fortalecer a la organización desde abajo, desde el territorio. Además, proyectos como los talleres de electoral, estrategia y comunicación, han sido también muy bien acogidos al recibir la militancia herramientas con las que poder enfrentarse en el momento electoral y también en su día a día. Tanto el proyecto de Comunidad como los talleres deben fomentarse y llevarse a cabo durante todo este mandato.

Las políticas progresistas que IU pueda impulsar desde su incidencia en el ámbito parlamentario o ejecutivo en el estado y en las CCAA, así como en su relevante presencia municipal, requieren la dotación de una coordinación federal sobre Políticas sociales, capaz de aglutinar las iniciativas en materia de derechos sociales, sanidad, educación y seguridad social, que permitan disponer de propuestas solventes a nivel federal, nutridas del trabajo de la organización a todos los niveles, y a la vez para el apoyo a todas las responsabilidades implicadas en el ámbito del estado de bienestar que defendemos.

El trabajo de afiliación ha sido un trabajo muy importante y hemos conseguido frenar la pérdida de militancia. No se ha conseguido invertir la tendencia, pero los dos últimos años de los últimos 11 han sido los que menos afiliación se ha perdido. No nos conformamos, pero frenar la tendencia es un pequeño primer avance para revertirla.

El trabajo con la UAR, la formación continua, la gestión de las altas y bajas por parte de la dirección federal si no se gestiona por los ámbitos territoriales, el envío del carné, son elementos que hay que mantener. Entendemos la necesidad de mejorar la atención directa a las personas afiliadas, para lo que ampliaremos los recursos en ese ámbito en cuanto sea posible.

En el nuevo mandato, optimizaremos las herramientas que ya existen y que se utilizan por otro tipo de organizaciones para poder hacer un seguimiento, casi en tiempo real, sobre las altas, bajas o sobre el uso de herramientas telemáticas de la organización por parte de la militancia: un cuadro de mando que tome los datos de la UAR y represente los datos más importantes para la organización. Así, con esta información, podremos tener una información cuantitativa sobre la situación militante y poder decidir o valorar si las políticas que se están llevando a cabo están siendo tan eficaces como esperamos o no.

En esta etapa hemos de seguir mejorando y proponemos varios elementos para poner en marcha. La conexión con nuestro entorno social, cultural y económico es imprescindible para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida de forma coherente y con nuestra clase. Para ello, el desarrollo de iniciativas sociales y culturales con las Federaciones será un objetivo y la puesta en marcha de un catálogo de servicios para la afiliación y los simpatizantes.

Feminizar la organización es imprescindible y para ello debemos poner en marcha y visibilizar las políticas ya aprobadas en la organización. Es importante hacer seguimiento de los indicadores aprobados en el Plan de Igualdad de IU en 2022, para que las propuestas no se queden en papel mojado. Igualmente debemos generar dinámicas de debate donde se garantice la participación correspondiente de las mujeres de la organización.

Feminizar la organización no pasa (solo) por conseguir un mayor número de afiliación femenina. De hecho, para conseguirlo, debemos necesariamente plantearnos si IU es un espacio que facilita y favorece la participación femenina.

Para ello, es necesario replantear los tiempos, los formatos, los métodos de debate, análisis y participación. Desde generar referencialidades a todos los niveles, hasta reflexionar sobre el uso que cada militante hace del tiempo en los espacios de debate. Las reuniones largas, los espacios masculinizados, la falta de ponentes femeninas en escuelas o ponencias deben ser cuestiones a enmendar para conseguir que Izquierda Unida sea una organización que facilite la participación de aquellas que sustentan los cuidados. Debe ser la organización la que se adapte a las condiciones materiales de las mujeres, y no a la inversa.

Igualmente debemos combatir activamente las dinámicas organizativas que, frente a la práctica de los cuidados, suponen ejercer violencias contra compañeras y compañeros. Esta supresión del actual modelo patriarcal debe ir acompañada del trabajo para generar dinámicas de debate donde se garantice la participación correspondiente de las mujeres de la organización.

Rejuvenecer la organización también es un imprescindible, fomentando la participación de las personas jóvenes a todos los niveles en aras de asegurar la renovación y relevo generacional, así como la riqueza del trabajo colectivo que desempeñamos.

Con el objetivo de contribuir a la organización y arraigo, no debemos olvidar el papel de la comunicación, interna y externa, como estrategia para unificar a la militancia y fomentar la transparencia. Para ello, se hace necesario revisar nuestra estrategia de comunicación, planteando realizar un plan de comunicación que atienda a estas cuestiones y que parta de un análisis de la estrategia hasta la fecha. Un plan que establezca estrategias de

comunicación que tengan en cuenta los cambios en los espacios de socialización y las nuevas realidades.

Se propone también poner en marcha una intranet de IU, accesible a toda la militancia, donde tener disponible toda la información de la actividad que se realiza en los distintos ámbitos de la organización, y que facilite la colaboración entre militantes, asambleas y grupos institucionales, para compartir información y ayuda en sus tareas cotidianas.

También debemos analizar el funcionamiento de las redes de activistas existentes. Aprovechar los conocimientos de las personas afiliadas en materias concretas y multiplicar el impacto de nuestra participación a nivel social debe ser un objetivo para Izquierda Unida, sin embargo los espacios de trabajo no pueden convertirse en ámbitos en los que se sustituya el debate orgánico y su funcionamiento debe ser analizado y mejorado. También en este periodo es necesario desarrollar vínculos concretos entre la elaboración que desarrollan las redes y asambleas con las actuaciones institucionales, así como con el posicionamiento de la organización.

Abriremos un proceso de debate para la elaboración de un reglamento de funcionamiento de las redes de activistas adaptado a la realidad actual que será trasladado a una reunión de la Coordinadora Federal para su debate y aprobación.

A pesar del trabajo realizado hasta el momento en formación para las personas de la organización, es necesario reforzarlo aún más. Debemos recuperar la idea de “organización pedagógica” de la que Gramsci hablaba. Es imprescindible estructurar un plan de formación, tanto teórica como práctica e instrumental, a distintos niveles que se pueda aterrizar en los territorios que genere una mayor coherencia organizativa, discursiva y pública.

3.2.2. Referencia histórica

La nuestra es una organización con trayectoria y experiencia que sostiene el hilo rojo de la historia y lo mejor de la tradición izquierdista. El objetivo de reforzar Izquierda Unida tiene una doble dimensión: por abajo, en los ámbitos político-organizativo, territorial y social; por arriba, en el imaginario colectivo a través de una mejora del posicionamiento y de la credibilidad y coherencia, tanto en el discurso, como en la acción, que se espera de nuestra organización. La primera dimensión es la más importante, pero la segunda también merece nuestra dedicación, pues son complementarios.

En el actual contexto de recomposición de la izquierda –por decepción–, apostamos por poner en valor los principales atributos que nos diferencian del resto de opciones de la izquierda, como la solidez y la fiabilidad políticas y organizativas gracias a nuestra implantación territorial y a nuestra trayectoria política. Debemos aprovechar la relativa fortaleza en ambas dimensiones para erigirnos en una izquierda confiable, que puede generar certidumbres y confianza.

Para ello proponemos la creación de un área de trabajo en la Colegiada Federal de Acción política que permita vincular el trabajo de comunidad con el trabajo de posicionamiento de la organización.

Durante estos años hemos construido una organización más democrática, más participativa y con más mecanismos garantistas. Esta es una seña de identidad de Izquierda Unida que hemos de preservar como cultura de la organización. El sufragio universal, los referéndums, las consultas vinculantes o las asambleas abiertas a nivel local son una apuesta de esta organización que debemos seguir mejorando. En ese sentido tenemos que reconocer, de forma autocrítica que a veces las decisiones que hemos de tomar no nos permiten generar procesos tan participativos como nos gustaría que los procesos de debate desde la base hacia la dirección deben ser recuperados para garantizar procesos más democráticos y la aportación de ideas de toda la militancia. Los referéndums son un ejemplo de ello, no siempre se dispone la información suficiente para poder organizar un proceso de debate lo suficientemente amplio. Sin embargo, debemos intentar mejorar estos mecanismos a la vez que debemos ser conocedores de la realidad que vivimos y de la rapidez de los procesos políticos. Conjugar estos procedimientos con las consultas que hay que realizar sin mermar el necesario debate, es el reto para esta nueva etapa y tenemos una oportunidad de resolverlo con la elaboración del reglamento de primarias.

3.2.3 Vocación unitaria: propuesta y posicionamiento para los espacios de convergencia

En este apartado debemos responder, desde el marco de la propuesta político-organizativa propia, cómo se posiciona Izquierda Unida en los espacios de convergencia.

Izquierda Unida ha demostrado a lo largo de su historia su vocación unitaria. Es más, Izquierda Unida nace en 1986 por la vocación unitaria del Partido Comunista de España que impulsa un proceso de convergencia social y política que se lanza en Andalucía con “Convocatoria por Andalucía”.

Izquierda Unida transitó de ser una coalición a una Federación de partidos en un proceso de varios años y en varias Asambleas. Desde esa experiencia de construcción de un movimiento político y social, desde la experiencia de intentar generar la convergencia de organizaciones políticas, sociales y sindicales es como Izquierda Unida aporta a la construcción de un Frente Amplio en España.

Pero nuestra vocación unitaria no se circunscribe a los inicios. Es importante recordar el proceso de Refundación de la Izquierda que se debatió en la Asamblea Federal de 2008 y a lo largo de varios años se fue trabajando, de forma desigual en los diferentes territorios. Es importante recordar el trabajo que se hizo con la “Guía para la Refundación de la Izquierda” y con el trabajo de foros temáticos, sectoriales y locales.

Nuestra experiencia y vocación unitaria es dilatada, no solo en generar coaliciones, sino en generar las condiciones objetivas para generar convergencias en las luchas, en los barrios, en los municipios y en los ámbitos sectoriales.

Desde esa experiencia hemos aportado a la construcción de Unidas Podemos, hicimos el acuerdo marco de las elecciones en 2019 y analizamos de forma autocrítica el funcionamiento de la coalición y la falta de mecanismos democráticos y de participación popular.

De nuevo en 2023 con el proceso de elecciones municipales volvimos a generar un marco de acuerdo con Podemos y con otras organizaciones en miles de municipios, a la vez que en

otros nos presentamos en solitario como Izquierda Unida. Y en paralelo apostamos por un Frente Amplio cuando Sumar empezó a tomar forma.

Realizamos varias Coordinadoras Federales para debatir nuestro modelo, en septiembre de 2023 definimos cómo entendíamos que tenía que ser el Frente Amplio, en diciembre del mismo año volvimos a analizar la situación y planteamos la necesidad de estabilizar la coalición ante las deficiencias que habíamos detectado en el proceso electoral y las situaciones que estábamos viviendo en los territorios. Por último, en febrero de 2024, tuvimos una Coordinadora Federal para ver cómo afrontar el proceso de la primera Asamblea de Sumar. Además de estas tres Coordinadoras Federales se realizaron varias Colegiadas ampliadas a Coordinadores/as y varias reuniones de responsables de organización.

Después de todo este trabajo, y desde nuestra demostrada vocación unitaria, hacemos la propuesta consecuente de construcción de un Frente Amplio, democrático y con voluntad de constituirse en bloque histórico.

La experiencia de estos años en las confluencias nos enseña que necesitamos diseñar una metodología de encuentro con otros que no sobrecargue a los militantes ni vacíe a la organización. Necesitamos fórmulas que nos permitan mantener visibilidad de nuestro proyecto político y de nuestra propia referencialidad.

Creemos que la mejor fórmula para que convivan partidos, organizaciones sociales y personas es la Federación de Partidos donde se regule las relaciones y las competencias de cada actor y de los órganos.

Para Izquierda Unida, la construcción de cualquier espacio conjunto o Frente Amplio debe hacerse desde el reconocimiento y asunción de las personalidades jurídicas de las partes que participen en el mismo. Por lo tanto, excepto la fórmula de partido político, cualquier otra (jurídica o no) puede ser válida.

Apostamos por la consolidación y democratización del espacio de Sumar, en lo que de ella depende y más allá, tratando de aglutinar un bloque de la izquierda que una a organizaciones políticas, sociales y sindicales que aspiren a un cambio social.

Desde Izquierda Unida proponemos al conjunto de actores que componen Sumar, y otros que ya no están, unas medidas que permitan avanzar hacia la construcción de un Frente Amplio empezando por priorizar que haya una coordinación interna similar a la de una coalición, con funcionamiento democrático.

Para ello, proponemos las siguientes líneas.

Apuesta por un espacio conjunto que crezca y no se reduzca. Uno de los objetivos del espacio unitario debe ser su búsqueda permanente de ampliarse y fortalecerse con otras organizaciones y, fundamentalmente, mediante la incorporación de colectivos y personas no organizadas.

- Por un espacio conjunto con mayor fortaleza organizativa. Mecanismos efectivos de participación democrática, deliberación y toma de decisiones. A la hora de adoptar acuerdos deben regirse preferentemente por medio del consenso, primándose la

síntesis y el diálogo y dotándose de mecanismos democráticos para resolver cuestiones en las que no se pueda alcanzar el consenso. Los mecanismos de coordinación deben respetar la autonomía de todas las partes integrantes.

- Por una articulación de un proyecto federal. Izquierda Unida defiende un proceso político sin asimetrías entre los territorios y las organizaciones. Garantizar derechos de participación a las organizaciones y a las personas es también establecer un sistema donde todos y todas sepamos de qué reglas nos dotamos, las cuales deben ser las mismas para todos y todas. Esto solo será posible haciendo efectivo el principio de una persona un voto.
- La puesta en marcha de coordinaciones entre organizaciones a todos los niveles es imprescindible, al igual que la posibilidad de articular debates o consultas para la toma de decisiones importantes. Trabajaremos la articulación de normas que ayuden a regular la convivencia política, la actividad institucional y la cooperación dentro del espacio.
- El desarrollo de estos espacios de coordinación debe ser tan amplio como sea posible pero flexible en su desarrollo, adaptándose a la realidad política y a los actores existentes y con una cobertura de mecanismos de mediación y solución de conflictos integrada y normalizada dentro de las estructuras.
- El objetivo no es alcanzar una unidad orgánica y/o electoral con todos los actores. Lo primordial es ser capaces de encontrar unos mínimos comunes para generar una agenda política propia y conjunta. Que se perciba por la ciudadanía que hay un espacio diverso con un discurso y unas prioridades compartidas.

Para corregir la situación actual y posibilitar el trabajo de la coalición electoral actual y la posibilidad de que se replique en el futuro, es imprescindible propiciar y habilitar mecanismos de relación multilateral entre los actores que la conforman. Además de esto, desde Izquierda Unida defendemos que no se puede utilizar la marca común de la coalición contra los actores que hemos construido el proceso.

IU no renuncia a seguir impulsando mecanismos de participación, que vayan más allá de la lógica de las coaliciones electorales en las que participamos en la actualidad, para la construcción de una izquierda alternativa y federal de amplia base popular. A tenor de cada experiencia debemos diferenciar cada proceso electoral, sin que esto afecte al desarrollo del trabajo en las instituciones en las que compartimos representación con otras organizaciones. Esas políticas de alianzas deben de responder a una necesaria coordinación y deben tener la máxima coherencia federal posible, cuestión esta que exige recuperar la bilateralidad y/o multilateralidad (cuando hablamos de más de un actor) como forma de relación con el conjunto de actores políticos de la izquierda. Igualmente debemos reforzar la presencia institucional y organizativa de IU como un actor más.

Si no conseguimos pasar de una coalición, Izquierda Unida no abandona su objetivo de poner en marcha mecanismos de participación popular como asambleas abiertas o primarias para los diferentes procesos electorales.

3.3 Acciones, campañas y debates a desarrollar en este período:

3.3.1. Debate sobre nuestra propuesta de Frente Amplio

La XIII asamblea Federal de Izquierda Unida, acuerda mandar a la coordinadora Federal elegida para convocar y organizar un debate monográfico para debatir, desarrollar y concretar nuestra propuesta de frente amplio y nuestra política de alianzas general. Este debate deberá hacerse con la máxima participación en todo el Estado de abajo arriba, comenzando el proceso en otoño de 2024.

3.3.2. Campaña por la derogación de la Ley Mordaza

IU pondrá en marcha una campaña por la derogación de la ley mordaza y de todas aquellas disposiciones legales que recortan o conculcan derechos democráticos, unida a una propuesta de amnistía para quienes hoy sufren condenas por ese tipo de medidas represivas.

Además, iniciará una ronda de contactos con los sindicatos de clase y movimientos sociales, así como con otras organizaciones de la izquierda transformadora, para acordar unir el máximo de fuerzas posibles en esta lucha.

Así mismo, propondrá al Grupo Parlamentario Confederal de Sumar que recoja la propuesta y haga la correspondiente proposición en el Congreso para la derogación de la ley y la aplicación de la amnistía a todas aquellas personas que han sufrido estas medidas antidemocráticas por expresar sus opiniones o por su actividad social, política o sindical.

3.3.3. Debate sobre el modelo organizativo

La Comisión federal de organización y finanzas pondrá en marcha un proceso de debate sobre cómo mejorar nuestra forma de organizarnos. Un proceso participativo en el que se implique el conjunto de personas afiliadas y simpatizantes. Las conclusiones del mismo serán la base de la ponencia organizativa y estatutaria para la XIV asamblea Federal de IU

3.3.4. Replantear el Socialismo en el siglo XXI

IU abrirá un diálogo para definir y concretar cómo debe ser el Socialismo en el siglo XXI y cómo construirlo. ¿Cómo se puede garantizar una democracia socialista, evitando la burocratización y el autoritarismo? ¿Cómo conciliar socialismo y el necesario respeto a los límites naturales del planeta? ¿Cómo combinar una propiedad pública y democrática de los sectores estratégicos (banca, energía, telecomunicaciones...) con una creciente economía social, autogestionada, y un mercado limitado por todo lo anterior, en el que sea imposible el crecimiento de grandes empresas capitalistas? ¿cómo construir una sociedad socialista y cómo se da un proceso revolucionario en nuestra época?

El objetivo debe ser elaborar un programa transformador concreto, realista y con la meta estratégica del socialismo.

Esta tarea que debe implicar al conjunto de la militancia, simpatizantes y abierta a nuestro entorno debería culminar en una conferencia política, que saque conclusiones de todo el

trabajo realizado y contar con la implicación de la FEC y demás fundaciones vinculadas a IU y a sus organizaciones.

Como primer paso se plantea **la elaboración de una carta de derechos sociales, democráticos y ecológicos**, que aúne medidas que permitan responder a los problemas más inmediatos y de fondo. La propuesta de partida es la siguiente:

- Derecho a la vivienda (fin real de los desahucios, parque público de vivienda).
- Derecho a un Ingreso Mínimo Digno (Renta básica universal).
- Derecho a la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial.
- Derecho a unos salarios dignos (salarios acordes con el coste real de la vida).
- Derecho a no ser discriminado (ni por ser migrante ni por ningún motivo).
- Derecho a una alimentación saludable (cuidando de los productores y los consumidores).
- Derecho a unos servicios públicos de calidad (Sanidad, Educación, Cuidados, Justicia e Información).
- Derecho a decidir de los pueblos del Reino de España (la unidad no puede imponerse).
- Derecho a la paz y la seguridad (basada en una vida digna, no en el militarismo).
- Derecho a un entorno natural saludable y sostenible (renaturalización de las ciudades...).
- Derecho a la movilidad (basada en el transporte público de calidad y promover la cercanía).
- Derecho a la Cultura (con un acceso real y respeto a la libertad de expresión).
- Derecho a la participación democrática (no sólo a votar cada cuatro años).